

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS JUDICIALES: LA BIBLIOTECA DEL TRIBUNAL SUPREMO : NOTAS PARA SU HISTORIA

1. Introducción

La Biblioteca del Tribunal Supremo es una biblioteca de titularidad pública, especializada en el mundo jurídico y de las ciencias del derecho, cuyos orígenes- al igual que otras bibliotecas de este tipo- se sitúan en el primer tercio del siglo XIX, aunque su desarrollo se realiza a partir de la segunda mitad del siglo XX.

En la actualidad, esta Biblioteca forma parte de la red de las 214 bibliotecas judiciales que integra a todas las bibliotecas relacionadas con la Administración de justicia, que prestan servicios en los juzgados y tribunales colegiados (Audiencias, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), como consecuencia de la política de información, promovida en los años 90, por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.

La misión general de los órganos en el que se inscriben las bibliotecas judiciales es impartir justicia. Esta misión se encuentra definida en el Art. 117 de la Constitución española¹ y el Art. 1 y 2 de la Ley orgánica del Poder Judicial². Su visión es constituirse en un sistema eficaz, efectivo y transparente. Sus metas: agilizar el proceso judicial, la eficiencia, eficacia y calidad, transparencia judicial y facilidad de acceso a la justicia.³

Dentro de este marco, la finalidad o misión de la Biblioteca del Tribunal Supremo es solucionar de forma satisfactoria las necesidades de información y

¹ 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. 2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

² 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. 2.1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los Tratados internacionales.

³ Cendoj: *III Jornadas de Bibliotecas judiciales*. Octubre 2003. Documento interno

documentación de este órgano judicial, que actúa como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales⁴, con las máximas competencias en materia de resolución de recursos y de unificación de doctrina. Su visión o deseo es constituirse en el servicio principal de información y documentación del órgano judicial, con un elevado grado de uso y satisfacción por parte los usuarios.

Sus usuarios son profesionales con una formación elevada y unos requerimientos de información especializados en las ciencias del derecho, encuadrándose en: a) usuarios con plenitud de derechos: magistrados, secretarios, fiscales, abogados del estado, letrados y demás personal de la Administración de justicia en ejercicio de sus funciones, b) usuarios restringidos: usuarios externos que reúnan la condición de investigadores, profesionales o a quienes la Dirección del servicio reconozca esta condición.⁵

2. Metodología

El estudio de las bibliotecas judiciales, en general, es un campo que se encuentra todavía por explorar, si tenemos en cuenta la escasez de literatura profesional existente en español y en otros idiomas. Por lo que se refiere a las bibliotecas judiciales de los tribunales españoles, éstas apenas constituyen una referencia en el contexto del sistema nacional de información. El presente escrito pretende por ello contribuir al conocimiento de este tipo de biblioteca especializada.

En la aproximación al estudio de la Biblioteca del Tribunal Supremo nos hemos encontrado con numerosas dificultades, entre las que cabe señalar la escasez de noticias sobre el lugar que ocupa la Biblioteca dentro de la estructura administrativa en los primeros tiempos del alto tribunal. Asimismo, faltan referencias documentales de carácter relevante que permitan seguir paso a paso el origen y desarrollo de la Biblioteca; la documentación existente se encuentra dispersa y fragmentada en varios archivos. A ello hay que añadir, los

⁴ C.E. 1978, Art. 123

⁵ *Normas del servicio de documentación y biblioteca del Tribunal Supremo*
<<http://www.poderjudicial.es>> (consultada el 23 marzo de 2006)

continuos cambios de sede de la Institución y los expurgos injustificados con el fin de convertir los documentos en pasta de papel⁶. Hay que apuntar que también nos hemos encontrado con limitaciones derivadas de la documentación que se conserva, mucha de ella sin clasificar y de las posibilidades de acceso a la misma.

En el presente estudio hemos utilizado normativas y disposiciones legales, documentación interna del Tribunal (memorias, libros de Actas, de registro, discursos de apertura del año judicial, informes) y otros documentos consultados en el Archivo General de la Administración (A.G.A.). Asimismo, los contactos personales con responsables de la organización y mi propia experiencia durante años de trabajo en la Biblioteca, han avalado mis observaciones.

Básicamente nuestro análisis se centra en el ciclo de vida de la Biblioteca, teniendo en cuenta la mutabilidad de su macroentorno y el marco institucional donde se desarrolla. Hemos dividido las fases por las que atraviesa la Biblioteca en tres grandes etapas cronológicas, teniendo en cuenta que el devenir de la Biblioteca se encuentra íntimamente unida a las vicisitudes por las que pasa el alto tribunal a lo largo de la historia del país, y a la importancia que se concede al servicio dentro de la propia Institución.

La primera etapa abarca el periodo comprendido entre 1812, año de creación del Tribunal, hasta 1939 en que finaliza la guerra civil. El turbulento ambiente histórico-político de todos esos años no favorecieron el despegue de la Biblioteca, que figura como una dependencia del Archivo. En la segunda etapa se examina el desarrollo de la Biblioteca durante el periodo franquista, hasta el

⁶ Véase Oficio de 17 agosto 1940 del archivero del Ministerio de Justicia, Clemente Calvo, a la Dirección General de Archivos, denunciando esta situación. A.G.A. Ministerio de Justicia. 1939-1977, Sig. 64, N° IDD 109.01, topog. 12/25. Una Real Orden de mayo 1911 del Ministerio de Justicia, regula los expurgos hasta el año 1966. Sin embargo, en Archivo del Tribunal Supremo: *Notas sobre expurgos judiciales*. (sin clasificar), se apunta:

En realidad los expurgos se realizaban cuando los archivos estaban saturados de papel, o cuando el Ministerio de Justicia lo necesitaba para publicaciones oficiales. (...) Las consecuencias de esta situación han sido los expurgos indiscriminados en los que se destruían todos los documentos y procesos anteriores a una fecha prefijada por el Ministerio, causando la desaparición casi total de los fondos documentales antiguos

advenimiento de la democracia. En este segundo periodo la Biblioteca empieza a funcionar como entidad autónoma, con un aumento progresivo de su colección, una organización y disponibilidad de uso de la información que almacena, principios éstos indispensables para que se pueda empezar a hablar de Biblioteca. En la tercera etapa, analizamos la situación actual de la Biblioteca, sus necesidades, y daremos algunas propuestas de mejora, sin olvidar que el futuro de la Biblioteca se encuentra ligado al futuro de la Institución en la que nace.

3.Orígenes (1812-1939)

Al Tribunal Supremo se le reconoce por primera vez como Alto Tribunal en la Constitución de Cádiz de 1812, aunque su antecedente inmediato es el antiguo Consejo y Cámara de Castilla, configurado como el Consejo de la Monarquía por autonomasia.⁷ Su nacimiento debe enmarcarse dentro las corrientes doctrinales que a fines del s. XVIII y principios del XX vienen de Francia, las cuales tendrán una influencia decisiva en la ruptura con el poder omnímodo real y el establecimiento de la separación de poderes que establece por primera vez la constitución gaditana. No obstante, a partir de ese momento, como sostiene Lorca Navarrete, el Tribunal Supremo correrá la suerte del régimen político que lo establece.⁸

El nuevo texto constitucional establece el denominado *Supremo Tribunal de Justicia* y lo configura como un órgano que encarna el “primero y mas alto poder de la jerarquía del Poder Judicial”, consignando sus propósitos y finalidad. Se le atribuye constitucionalmente once funciones, aunque no el de conocer los recursos de casación, pero sí el de nulidad de actuaciones.⁹ Para Moreno Pastor, en su primera configuración el Tribunal Supremo viene a cumplir una misión menos jurisdiccional que política, siendo su principal

⁷ Francisco Tomás y Valiente : “De la Administración de Justicia”. En: *Jornadas sobre el Poder Judicial en el Bicentenario de la Revolución Francesa*. Madrid: Ministerio de Justicia, 1990, p.17

⁸ Lorca Navarrete, A.M. *Organización judicial española en el vigésimo aniversario de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985-2005)*. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2005.p.139

⁹ García-Goyena, F. *Tribunal Supremo de España: noticias sobre su historia, organización y funcionamiento*. Madrid: Reus, 1929

atribución la inspección suprema de todos los Jueces y Tribunales encargados de la nueva Administración de Justicia.¹⁰

En cumplimiento del texto constitucional, se aprueba por Decreto de 13 de marzo de 1814 el primer Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, compuesto por 3 Salas no especializadas, dotadas de 11 Ministros. En el capítulo V, dedicado a los Subalternos del Tribunal (Relatores, Escribanos, Registradores, Tasador) se establece las funciones de los Escribanos¹¹ del Supremo Tribunal de Justicia, entre las que se encuentran las funciones documentales de custodia de los papeles de sus Escribanías, formando el correspondiente índice (art. 37).

Apenas dos años duró el ejercicio del Alto Tribunal, establecido en Cádiz y de su primer Presidente, Ramón Posada-Soto y Rivero. La derrota de Napoleón trae consigo el retorno de la Institución monárquica y el 4 de mayo de 1814, con el regreso a Madrid de Fernando VII, se anula la Constitución y se vuelve a los Consejos Reales. Ello supuso, la confusión de las esfera administrativa y judicial como emanadas del Poder Real, situación ésta que persistió en el Trienio Liberal (1820-1823), hasta el reinado de Isabel II.¹²

En 1834, bajo el Gobierno de Martínez de la Rosa, y desempeñando la cartera de Gracia y Justicia, Nicolás María Garellly, se suprime por Decreto de 24 de marzo los antiguos Consejos y se restablece definitivamente el entonces denominado *Tribunal Supremo de España e Indias* en el vértice de la estructura jurisdiccional. El nuevo Tribunal, cuyas competencias y funciones todavía no quedan fijadas, se divide en tres Salas ordinarias, una de ellas dedicada a los

¹⁰ Esta misión se anuncia en el Discurso Preliminar de la Constitución. Cit. En: Moreno Pastor, Luis. *Los orígenes del Tribunal Supremo, 1812-1838*. Madrid: Ministerio de Justicia, 1989. p. 359.

¹¹ Durante el Antiguo Régimen, el escribano documentaba lo que decían los jueces. Era un oficio venal, cuyo salario se cobraba de las partes procesales; tenían sus propios empleados, escribientes y llegaron a ejercer un profundo control en la Administración de justicia. Véase: Gandaregui, M. J. "Historia del lenguaje judicial". En: *Lenguaje judicial*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1998. pp. 145-248. Se puede decir que los escribanos ejercían las funciones que hoy tienen los Secretarios judiciales. Véase también : Tranzado Ruiz, M. : "En torno al Secretariado y su selección". En: *Boletín de información*, 1970. En las bibliotecas mesopotámicas se denominan también Escribanos a los encargados de custodiar los textos escritos y aplicar métodos para poder recuperarlos en cualquier momento.

¹² Lasso Gaité, J.F. *Aportación a la historia del Tribunal Supremo*. Madrid: Reus, 1968. p.6

negocios de Ultramar, La nueva Sala de Indias perdurará hasta la Constitución de 1968,¹³ donde vuelve a su antiguo nombre recogido en la Constitución gaditana: *Supremo Tribunal de Justicia*.

Será el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia, de 26 de septiembre de 1835, en el capítulo referido al Tribunal Supremo, y el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias, de 17 octubre de 1835, los que completan la estructura ,composición, funcionamiento y atribuciones del Tribunal Supremo. Como curiosidades de la época, cabe resaltar el tratamiento que en el mencionado Reglamento se da a los Magistrados, principales usuarios de la Biblioteca, a los que se denominan *ministros*, que *será el de Alteza, y el de Muy poderoso Señor en el encabezamiento* (art.1), Por lo demás, el cap. V de este Reglamento, referido a los subalternos y, concretamente a las funciones de custodia de la documentación de los escribanos del Tribunal, es casi una reproducción literal del aprobado en 1814.

Siguiendo a Luis Moreno Pastor¹⁴, el año 1838 supone la conformación del Tribunal como órgano de control de la casación, a través del Decreto de 4 de noviembre de ese año. Para este autor, es a partir de esta fecha donde el Alto Tribunal comienza verdaderamente su actividad, en el sentido conceptual moderno del término. El mencionado Decreto “aparece formulada por primera vez la noción de “doctrina legal”, así como la posibilidad de fundar el recurso de nulidad por la doble vía de la infracción de ley (clara y terminante) de la doctrina legal, lo que en definitiva suponía abrir la puerta a la formación de la jurisprudencia del Tribunal”.¹⁵

Desde el punto de vista documental es a partir del primer tercio del siglo XIX, cuando se empiezan a apreciar los frutos nacidos del nuevo Estado liberal en el campo administrativo, normativo y la práctica jurídica, cuyo sistema de información se va acrecentado. Hasta entonces, el derecho vigente se hallaba

¹³ En cumplimiento del mandato constitucional, el Decreto-Ley de 26 de noviembre de 1868, reorganiza el Tribunal Supremo en 3 Salas de Justicia, encomienda a la Tercera lo contencioso-administrativo y suprime la Sala de Indias.

¹⁴ Moreno Pastor, L., Op.cit. p.15

¹⁵ Op.cit. p.360

contenido en la *Nueva Recopilación*, publicada en 1799 y reimpressa en 1802 y 1805, bajo el título de *Novísima Recopilación*, que viene a paliar en parte la dispersión de las leyes vigentes. Sin embargo, esta publicación, empresa de un solo autor¹⁶, fué objeto de críticas entre los juristas contemporáneos debido al desorden de las materias tratadas, repeticiones, lagunas, anacronismos y desarmonía en el lenguaje, consecuencia de la mezcla de leyes de los siglos XII y XIII con otras de finales del siglo XVIII.

La aparición del Estado moderno traerá consigo la denominada gran era de la codificación, en la que se atiende a una doble finalidad: la recopilación y la estructuración del Derecho vigente¹⁷. Se crean instituciones productoras de documentación jurídica encargadas de redactar los cuerpos de leyes y que facilitarán la tarea codificadora, como la *Comisión de Codificación*, creada en 1843.¹⁸ dando una nueva dimensión a la actividad legislativa y judicial.

Con el destronamiento de Isabel II, como consecuencia de la Revolución de septiembre de 1868, iniciada en Cádiz, y la promulgación de una nueva Constitución liberal en 1869, se establece la descentralización administrativa y judicial, limitándose drásticamente los poderes de la Corona, dotando de mas independencia al poder judicial. El texto constitucional establece que el ingreso en la carrera judicial será por oposición. Sin embargo, el Rey podrá nombrar de forma discrecional hasta la cuarta parte de magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo; siempre con audiencia del Consejo de Estado¹⁹.

La ley Provisional de Organización de los Tribunales, de 15 de septiembre de 1870 – que duró casi 100 años y constituye el antecedente histórico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dará un giro a la Institución. Esta Ley, no sólo

¹⁶ D. Juan Reguera Valdelomar, Relator de la Chancillería de Granada, la imprime por indicación del Consejo de Castilla. Lasso Gaité, J.F. *Crónica de la codificación española : organización judicial*. Madrid : Ministerio de Justicia. Comisión General de Codificación, 1999. p.2

¹⁷ Alvite, M.L. “Evolución de las bases de datos jurídicas en España”. En *Anales de Documentación*, 2004, nº 7, p.8. Macía, M. (ed.). *Manual de documentación jurídica*. Madrid: Síntesis, 1998. p.21

¹⁸ Decreto 19 de agosto de 1843.

¹⁹ Alzaga Villaamil, Ó. : “ El Poder judicial en las Constituciones españolas”. En: *Constitución y Poder Judicial: XXV Aniversario de la Constitución de 1978*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2003. p.70-71

establece las competencias y una estructura similar a la que disfruta en la actualidad el Tribunal Supremo²⁰, sino también cobra carta de naturaleza el sistema de documentación, acentuando la labor de los archiveros judiciales.

La Ley establece, que el archivero judicial también se hará cargo de la biblioteca, especificándose que en aquellos tribunales en que no hubiese archivero, será el Secretario de Gobierno el que estará al frente de la misma (art.515). Se especifica que *en el Tribunal Supremo y en las Audiencias habrá un archivero con las dependencias necesarias para la custodia, conservación y arreglo de los documentos* (art.535). Además, se establecen las condiciones requeridas para ser archivero que serán *aquellas que señale la Administración para esta clase de destino*²¹, *y reunir además la circunstancia de ser abogado* (art.536).

Que un archivero, experto en el tratamiento de la documentación durante todo el ciclo de vida de los documentos, fuera la persona idónea para llevar una biblioteca especializada en el mundo jurídico, cuyo *corpus* bibliográfico era cada vez más extenso, constituía ya un tema de debate²² entre los mismo profesionales de la época. Por ejemplo, en 1874 Manuel Torres Campo, bibliotecario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la memoria que realiza sobre esa Institución, se lamenta del mal estado de las bibliotecas jurídicas españolas debido a la desacertada selección de sus fondos, que achaca a la falta de conocimientos de los Archiveros-Bibliotecarios de la bibliografía científica contemporánea, así como al desconocimiento de las técnicas bibliotecarias.²³

El problema, sin embargo, como veremos mas adelante, radicaba no tanto en el talento del archivero en la práctica bibliotecaria, como en la falta de tiempo y dedicación para compaginar las dos funciones de archivo y biblioteca.

²⁰ *Tribunal Supremo de Justicia*. Madrid: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, 2004

²¹ El R.D. de 18 de julio de 1958 crea el Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, que en 1867 pasa a denominarse Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios

²² El debate está aún por resolver. No obstante las diferencias sustanciales entre archivos y bibliotecas se concretan en tres: génesis o reunión de los documentos, su tratamiento, y el objeto básico de atención.

²³ Luis García Ejarque: *Historia de la lectura pública en España*. Gijón (Asturias): Trea, 2000, p.134

Al impulso legislativo le siguió también el impulso material, y en ese mismo año, siguiendo las corrientes desamortizadoras iniciadas por Juan Álvarez de Mendizábal, en 1837, seguidas por el Ministro Pascual Madoz, en 1855, se ordena por Decreto de 27 de octubre de 1870, la exclaustración de las monjas de la Visitación – conocidas como Salesas Reales- de su convento-monasterio²⁴, y la conversión del edificio en Palacio de Justicia, exceptuando la Iglesia, unida al edificio, que continuará abierta al culto público.

La necesidad que tenían los tribunales de Madrid, y concretamente el Tribunal Supremo, de un edificio de acuerdo a su categoría, se pone de relieve en el Decreto de 1870 mencionado, donde se informa de la precariedad en la que se encontraban los edificios e instalaciones de los Tribunales de Justicia en esa ciudad, que califica de *estrechos y miserables*, y los compara con los *magníficos y suntuosos edificios, verdaderos palacios donde tienen su residencia los Tribunales de otras capitales de Europa*. También nos habla de la situación de los Archivos judiciales (...) *parte abandonados en el edificio de la Bolsa, parte a punto de convertirse en polvo o podredumbre en los húmedos sótanos del Ministerio de Gracia y Justicia y de los edificios de los Consejos y de la Audiencia*. Por lo que se refiere al Tribunal Supremo de la Nación, éste (...) *se halla escondido en los más recónditos departamentos de la planta baja del edificio de los Consejos, que comparte con las oficinas mecánicas del juego de la lotería*.

Asentado en el Palacio de los Consejos de Madrid, asimismo sede del antiguo Consejo Real,²⁵ desde 1834, el Tribunal Supremo y su archivo- biblioteca iban al fin a tener una sede permanente, en un suntuoso edificio y *sin imponer al contribuyente el más leve sacrificio*. El proceso de sedentarización, sin embargo, durará años.

²⁴ El convento era regido por la Comunidad religiosa de San Francisco de Sales, y promocionado por Doña María Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VII, con el fin de dedicarlo también como centro de educación para las hijas de la nobleza. Bárcena, A.M de la., *El Palacio de Justicia en Madrid: descripción del edificio, antecedentes históricos, las casas de Justicia de antaño*. Madrid: Est. Tip. de Blass, 1927

²⁵ Lorca Navarrete, A.M. Op. Cit. p. 138

Las cosas de Palacio van despacio y el Alto Tribunal presenciara el Reinado de Amadeo de Saboya (1871), la proclamación de la Republica (1873), el Golpe de Estado de Pavía (1874), y el periodo de Restauración con el reinado de Alfonso XII (1875), hasta que en 1878 se instala, con las obras ya terminadas, en las dependencias del antiguo Convento de la Visitación, acompañado de las Audiencias Territoriales y Provincial de Madrid, el Colegio de Procurados y el Colegio de Abogados, así como los Juzgados de Guardia.

En sus inicios, la única biblioteca que se instala ese mismo año en el Palacio será la del Colegio de Abogados, trasladada a esas dependencias junto con los fondos de la Institución, siendo decano del Colegio, José Carvajal.²⁶ Durante bastantes años, esta biblioteca que ya contaba con una amplia colección, abastecerá de textos no solo a los abogados sino también a los magistrados del Tribunal Supremo, hasta 1994 en que el Colegio abandona definitivamente los locales del Palacio.

En esos primeros años de asentamiento en el nuevo edificio, con apenas medios materiales, los esfuerzos se concentraran en los maltratados archivos y su reorganización. Una Circular de la Presidencia del del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 1883, resalta la importancia de estos servicios y ordena realizar un *inventario general de los procesos, expedientes y documentos que en el mismo se custodien, cuyo libro será de papel común, estará dividido en secciones según la clase de asuntos, y dentro de cada sección seguirá el orden alfabético y expresará el armario o estante donde cada volumen esté colocado.*²⁷

Frente a la inevitabilidad de la existencia del archivo, que nace espontáneamente como sedimentación documental de la práctica jurídica, la creación de la biblioteca tendrá que esperar algunos años más para que adquiriera carta de naturaleza en la Institución. A ello contribuyó la promulgación

²⁶ García Paredes, Ch., Barabino Ballesteros, J.M., "Orígenes y formación de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid". En: *La Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*. Navarra:Tompson- Aranzadi, 2005, p.14

²⁷ Sánchez Torre, F. *Lo gubernativo en los tribunales y juzgados*. Albacete: Imprenta y Librería de Sebastián Ruiz, 1899 p.63

del Real Decreto de 6 de octubre de 1885 donde vemos que el servicio de biblioteca se singulariza y promueve en las instituciones judiciales, en general, con el fin de satisfacer las necesidades y demandas de los miembros de los distintos órganos. Esta normativa, compuesta de 12 artículos, puede considerarse la matriz de lo que serían mucho más tarde las bibliotecas judiciales. En ella se establece que desempeñaran el cargo de bibliotecario los Archiveros, y en su caso, los Secretarios de las Audiencias, o los Secretarios de gobierno en los Tribunales, bajo la inspección inmediata de los Presidentes. El articulado de la normativa hace referencia a los fondos, edificios y colecciones de la biblioteca. Por lo que se refiere a la colección establece que ésta se formará, primero, con los fondos procedentes de las asignaciones que para tal concepto considere el Ministerio de Gracia y Justicia y, segundo, con las colecciones y obras que se publiquen por cuenta del Estado y que puedan facilitarse por el Gobierno. Formaran la base de estas bibliotecas los códigos vigentes, los Fueros en observancia en el territorio en que el Tribunal ejerza sus funciones y la colección legislativa de España. Se formarán además catálogos especiales para el complemento de cada biblioteca. Otros apartados hacen referencia a las condiciones de acceso, préstamo y uso, extravíos y responsabilidad, memoria, altas y bajas de obras, régimen de ordenación, conservación. Por último, se habla de realizar un Reglamento para su régimen, aunque esta medida nunca se adoptó.

En el primer tercio de siglo XX, el Tribunal Supremo va a vivir los abatares del sistema político heredado de la Restauración del siglo anterior, la dictadura militar de Primo de Rivera y, finalmente, la instauración de una régimen republicano en 1931.

En el campo de la archivística y biblioteconomía, la década se abre con la creación, en 1901, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que asume las competencias del desaparecido Ministerio de Fomento. Asimismo, en ese mismo año se aprueba el Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado al que se incorporan la de los establecimientos de enseñanza y las pertinentes a departamentos ministeriales y corporaciones

científicas, y el Reglamento para el Régimen y el Gobierno de los Archivos del Estado²⁸.

En el alto Tribunal, la Biblioteca queda a cargo del archivero, como una obligación añadida a sus funciones. En el Reglamento para el Servicio de la Secretaria de gobierno del Tribunal Supremo, de 31 de enero de 1906, se especifican las funciones y tareas del Archivero-Bibliotecario, responsable del negociado que se denomina Archivo-Biblioteca.(Art.13.), y cuyo nombramiento recae en Sebastián Moro y Martínez.²⁹ De esta etapa, no tenemos constancia de la existencia de listas de libros que pudieran hacer las veces de inventario o de catálogos de la colección de la Biblioteca.

El 5 de mayo de **1915** un enorme fuego destruye casi por completo el edificio del Palacio de Justicia. Unos años más tarde, el Facultativo Sr.Lostau informa:

El archivo instalado en los desvanes del edificio y la techumbre formada por gruesos pinos de Balsaín, fueron los principales elementos que mantuvieron aquel enorme brasero que duró casi una semana, a pesar de los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos, que pagó con sangre su heroicidad.³⁰

No hay duda que la instalación del archivo en la parte alta del edificio no era el sitio mas adecuado para salvaguardar la seguridad del edificio. Consecuencia de ello fue la pérdida de valiosa documentación ³¹ y el desalojo del inmueble.

Durante casi once años, el Alto Tribunal tiene que deambular de forma provisional por varios edificios de Madrid, hasta la finalización de las obras de

²⁸ Véase García Ejarque, Op. cit. y Alberch i Fugueres, R., *El concepto, la historia y el marco legal de los archivos*. Barcelona: UOC, 2003, (Documento de trabajo).

²⁹ Real Decretode 29 de noviembre 1906.

³⁰ *Memoria sobre el Estado del Archivo del Tribunal Supremo de Justicia. 1931-1932.*
A.G.A.(05) 001.003 Caja 31/5143

³¹ Lostau calcula que *únicamente se salvó un corto número de legajos (unos 600 referentes al Personal de la Magistratura, Justicia Municipal, Tribunal de Autos, etc.), pero en cambio la colección de sentencias originales, encuadernadas formando un protocolo, y que para su mayor custodia se conservaban en otro piso, se libraron del incendio.* En un informe, sin fecha y firma, se comunica que *del incendio de 1915, solo se salvaron 600 legajos de recursos y la colección íntegra de sentencias originales. Las sentencias civiles arrancan de 1856; las contenciosas parten de 1866; las penales datan de 1870; las sociales tienen su origen en 1932.* (A.G.A. Archivo de la Administración. Instrumentos de Descripción, Legajo 64, N° IDD 109.01, topogr. 12/25). Laso Gaité, J.F. (1968), apunta que también se salvaron del incendio las bibliotecas y cuadros mas importantes p.40

reconstrucción, en 1926. La dirección de las obras se encarga al arquitecto Joaquín Rojí y Lopez-Calvo, quien aprovechó las marcas de carga, fachadas y traviesas que habían quedado del incendio para remodelar el edificio y reforzar su esplendor.

Apenas tenemos noticia de la Biblioteca durante los años en que el Tribunal se encontraba fuera de Palacio durante las obras de remodelación. De ese periodo solo se conservan dos libros manuscritos en tinta. El primero, es un *Libro de Registro de entradas y salidas de libros, papeles y otros documentos*, abierto el 1 de mayo de 1918, cuyo primer apunte es la salida de la biblioteca de un volumen de la Colección legislativa para la Sala Tercera, y entregado al ordenanza Benigno, y la última inscripción lleva la fecha del año 1922. Se observa que no hay rigor en los apuntes, donde las entradas y salidas de obras como la colección legislativa, Gacetas, sentencias, Alcubillas, memorias, Códigos, etc. aparecen entremezcladas, hasta llegar al final del Libro, escrito con letra muy grande, sin ningún orden ni concierto.

El segundo, es un *Libro de Registro de obras de la Biblioteca del Tribunal Supremo entregadas o devueltas*, abierto el 16 de enero de 1923 y finalizado el mes de mayo de 1925. En él aparece reflejada la fecha de pedido, el título de la obra y su autor, la persona a quien se le hace la entrega, y la fecha de devolución. Una vez devuelta, el apunte aparece tachado en rojo. Las obras parecen prestarse por un periodo corto y en algunas inscripciones, detrás del nombre del usuario figura entre paréntesis (a su casa), lo que da que pensar que los magistrados durante ese época, como también en épocas posteriores, trabajaban también en su domicilio.

De vuelta al Palacio, el Archivo y la Biblioteca se sitúan en la planta baja del edificio, ocupando tres habitaciones amplias. La Biblioteca, en particular, compuesta de *obras antiguas de Derecho español, entre las que se encuentra un ejemplar de 4 tomos de las Siete Partidas, colecciones legislativas y periódicos oficiales*, se instala en el despacho del Facultativo y sala de trabajo

del archivo, donde también se reúnen los libros que estaban dispersos en las distintas dependencias de la Casa³².

A falta de una buena biblioteca, el personal del Tribunal Supremo tiene que recurrir a la Biblioteca del Colegio de Abogados, que aunque sita en el mismo Palacio, no había sido muy afectada por el fuego³³. Durante muchos años, esta biblioteca que contaba con grandes colecciones, de ricos y valiosos fondos, cubrió las necesidades de información de la magistratura del alto Tribunal.

Con la llegada de la Segunda República, el Decreto de 6 de mayo de 1931 reorganiza del Tribunal Supremo en cinco Salas: Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Criminal; Tercera y Cuarta, de lo Contencioso-Administrativo, y Sala Quinta, de lo Social. Asimismo, en cumplimiento de la Constitución fue creada la Sala Sexta, llamada de Justicia Militar o Sala Mixta a la que se conceden las atribuciones del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Además de estas Salas ordinarias, se crearon otras denominadas especiales³⁴.

Unos meses más tarde, bajo la Presidencia de Diego Medina y García, los archiveros del Tribunal Supremo y de la Audiencia Territorial se incorporan, por Decreto de 12 de noviembre de 1931, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado. Estos funcionarios, dependerán del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y de los respectivos Presidentes de las Audiencias Territoriales y del Tribunal Supremo. La medida, en definitiva, venía a profesionalizar y dotar de mayor especialización técnica la labor del Archivero-Bibliotecario.

³² *Memoria sobre el Estado del Archivo del Tribunal Supremo de Justicia. 1931-1932*. Ibíd.

³³ No obstante la Biblioteca del Colegio de Abogados aprovechó las obras de remodelación para ampliar la zona de lectura, el depósito de libros, realizar una nueva distribución de espacios y la construcción de estanterías en dos pisos con una galera volada de madera que permitía el acceso a la planta segunda. En 1965, la biblioteca, se reorganiza de nuevo y se elimina la doble altura, suprimiéndose la galera volada de madera que permitía el acceso a la planta segunda, restituyendo a la biblioteca la doble altura del proyecto original. Véase García Paredes, Op.cit. pp.14, 20 y *Tribunal Supremo de Justicia* (2004). Op. cit.

³⁴ Elena Rodríguez Magallanes: "Documentación del Archivo del Tribunal Supremo". En: *Justicia en Guerra: Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes documentales*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990 .pp.484-496

En 1932 Eugenio Lostau y Cachón es nombrado como único Facultativo de los Archivos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Territorial de manera conjunta³⁵. El archivero-jefe se centra en un primer momento en la reorganización del Archivo del Tribunal Supremo; empresa que termina en 1942, para luego continuar con la organización del de la Audiencia, como refleja en su Memoria de 1944. Sin embargo, a este funcionario el trabajo no debió de resultarle fácil:

sin personal auxiliar, ni subalterno y con unos archivos que no tenían de tal mas que el nombre, ya que ambos eran montones de depósitos de papeles, sin índices, ni catálogos, ni organización de ninguna clase.

Durante el alzamiento militar y la consiguiente Guerra civil (1936-1939) se produjo la quiebra del Estado, aunque algunas instituciones continuaron formalmente funcionando. El Tribunal Supremo, en particular, pasó por diferentes vicisitudes y se ve obligado a un continuo peregrinar por distintas capitales españolas, según el desarrollo de la Guerra, llevando consigo los aparejos imprescindibles para su funcionamiento: documentos, libros y documentación que estaba en tramitación, así como el traslado de personal, que no había sido movilizado³⁶.

El 6 de noviembre de 1936, según Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de la Guerra el Tribunal se traslada a Valencia³⁷, donde ya se encontraba el gobierno de Largo Caballero, desde mediados de octubre de ese año. El 22 de octubre de 1937, el Auxiliar del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Alejandro de Gabriel y Ramírez de Cartagena, con destino en el Archivo de Madrid desde 1933, se traslada a Valencia para trabajar en el Archivo en esa ciudad y el Facultativo, Sr. Lostau es cesado por desafecto al régimen.³⁸

³⁵ El Sr. Lostau simultaneará esta labor con la de Oficial Mayor de la Biblioteca del Colegio de Abogados, función que venía ejerciendo desde 1913, hasta su jubilación, en 1971, siendo condecorado a tal efecto con la Medalla del Trabajo.

³⁶ A.T.S., Legajo 3137 de Secretaría de Gobierno, Expediente 17

³⁷ El Decreto del Ministerio de Justicia, de 14 de enero de 1937, publicado en la Gaceta de la República del día 18, establece las normas para el funcionamiento del Tribunal Supremo en Valencia y de la Sección delegada en Madrid.

³⁸ La cesantía de Lostau apareció publicado en la Gaceta de Madrid, el 10 de septiembre de 1936.

En Madrid queda una sección delegada del mismo, y el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, designa de forma provisional, a Pedro Mora, que fue jubilado poco después, y a Martín de la Torre y Villar, adscrito a la Biblioteca Nacional, encargado de la conservación y servicio del Archivo del Tribunal Supremo. Éste último trabajó en la incautación y catalogación del Archivo y Biblioteca Parroquial de la Iglesia de Santa Bárbara, que había sido adscrita al Palacio de Justicia³⁹ y cuya documentación había sido depositada en el Archivo del Supremo hasta su devolución, en 1939.⁴⁰

Posteriormente, cuando la relación de fuerzas entre los dos bandos quedó muy alterada, el Tribunal se traslada a Barcelona,⁴¹ donde se encontraba instalado el gobierno de Negrín, que en mayo había sustituido al de Largo Caballero. Un oficio remitido por el Jefe del Archivo a la Delegación de Bellas Artes de Madrid, con fecha 9 de enero de 1939, informa de la precariedad de la plantilla de ese Archivo, compuesta por dos funcionarios; uno facultativo y otro auxiliar técnico, ambos sexagenarios y exentos del servicio militar por edad.

La campaña de Cataluña, llevada a cabo por las tropas de Franco y la conquista de Barcelona, el 26 de enero de 1939, pone fin al Tribunal Supremo Republicano y a la separación de sus cargos de todos los Presidentes, Magistrados y funcionarios del Ministerio Fiscal que lo componían⁴², aunque todavía el Tribunal Supremo en Madrid, se encuentra en la zona leal al Gobierno republicado.⁴³

³⁹ Decreto del Ministerio de Justicia de 16 de octubre de 1936.

⁴⁰ *Memoria de los trabajos realizados en 1939*, enviada, el 16 de abril de 1940, al Inspector General de Archivos. A.G.A. (05)001.003, Caja 31/5143. El inventario de los libros parroquiales de la Iglesia de Sta. Bárbara, puede consultarse en el Archivo del Tribunal Supremo. Expedientes Gubernativos 1939. Legajo 7443.

⁴¹ Sobre la constitución del Tribunal en Valencia y Barcelona, véase Archivo Tribunal Supremo. Secretaría de Gobierno, Legajo 3223

⁴² Ley 27 de agosto 1938. Sobre la constitución del Tribunal Supremo, véase también Archivo del Tribunal Supremo, Secretaría de Gobierno, legajo 6854, expediente 7. Sobre la provisión de vacantes para cargos en la Carrera judicial en los primeros meses del Movimiento Nacional, véase Orden 24 agosto 1938

⁴³ Lanero Táboas, M., *Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945)*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996

De forma provisional y transitoria, los franquistas impulsan la rápida reorganización del Tribunal Supremo en la zona nacional,⁴⁴ en cuatro Salas servidas por cuatro Presidentes de Sala y dieciséis Magistrados⁴⁵, y el establecimiento de su sede en Valladolid⁴⁶. La elección para albergar el primer Tribunal de la Nación recae en Valladolid por tres razones fundamentales que merece la pena citar, por lo que al tema de bibliotecas se refiere: primero, por la idoneidad de sus instalaciones, en número suficiente para instalar al Tribunal, a los funcionarios y a sus familias; segundo, por su posición geográfica, en el centro del país y con un buen nudo de comunicaciones; tercero, por la existencia de varias bibliotecas que facilitarán la labor de los Magistrados ante la carencia de biblioteca del propio Tribunal.⁴⁷

Con la ayuda económica de ese Ayuntamiento, que sufraga las obras necesarias para su instalación en la Audiencia Territorial, en febrero de 1939, el alto Tribunal ya funciona en Valladolid.

El asentamiento duró poco. En mayo de 1939, casi dos meses después de que el Cuartel General de Franco comunicara el fin de la guerra, en el llamado “Año de la Victoria”, que tanto se cita en la correspondencia oficial de la época, el Tribunal funciona regularmente en Madrid, bajo la presidencia del civilista Felipe Clemente de Diego, quien ocupará el cargo hasta su fallecimiento, en el verano de 1945⁴⁸. El Sr. de Diego fundará la nueva Biblioteca, y contará con la colaboración del Secretario de Gobierno, Sr. Tornos.

4. Formación (1939-1980)

La guerra civil provocó la acumulación de recursos y graves pérdidas en el patrimonio documental. Durante los años de posguerra, el Archivo y la Biblioteca se verán afectados por la falta de medios económicos y la carencia

⁴⁴ Según las Actas de la Sala de Gobierno de esos años que se conservan en el archivo del Tribunal Supremo, la primera reunión de la Sala de Gobierno tiene lugar el 28 de noviembre de 1938, en Vitoria, donde también residía el Ministro de Justicia, y fue presidida por Felipe Clemente de Diego. En esa primera Junta y en la siguiente, se barajan las ciudades de Valladolid, Salamanca y Pamplona para albergar al primer Tribunal de la Nación.

⁴⁵ Ley 27 de agosto de 1938.

⁴⁶ Orden de 21 de diciembre de 1938.

⁴⁷ Archivo Tribunal Supremo. Acta de la Sala de Gobierno, de 5/12/1938, en Vitoria

⁴⁸ Lasso Gaité, J.F., (1968)., Op. cit. p. 70

de personal, unido al aumento de la actividad judicial en todos esos años⁴⁹. A mediados de los años 40 y a lo largo del dilatado periodo dictatorial, la situación de colapso y abandono en la que se encontraban estas unidades de información empieza a remitir, y la biblioteca, aunque todavía en simbiosis con el Archivo, se va haciendo un hueco dentro de la estructura administrativa de la institución.

Durante la época de la Dictadura, hay que resaltar la promulgación de dos normativas que afectan al mundo bibliotecario: el Decreto de 24 de julio de 1947 sobre ordenación de los archivos y bibliotecas del denominado Tesoro Histórico-Documental y Bibliográfico, y la Ley 26 de 1972 para la defensa del Tesoro Bibliográfico y Documentación de la Nación, vigente hasta la promulgación de la Ley 16 de 1985 que regula el Patrimonio Bibliográfico y Documental.

Predomina el concepto de Biblioteca-depósito, cuyo objetivo es la formación de colecciones de libros actualizados que satisfagan las necesidades de los miembros del Tribunal para desarrollar su actividad, haciendo hincapié en las funciones de custodia y conservación. Asimismo, se realizan los primeros catálogos para la recuperación de la información y se empieza a ofrecer servicios de difusión de la información entre los miembros del Tribunal.

El 28 de enero de 1939 se nombra una comisión del Tribunal Supremo franquista para trasladarse a Madrid y hacerse cargo de los documentos y mobiliario existente en el Palacio de Justicia. El Acta de la Sala de Gobierno del día 3 de abril de ese mismo año recoge la incautación que se realiza en los locales del Palacio y el inventario del mobiliario, biblioteca y documentación⁵⁰.

⁴⁹ Véase, Lanero Táboas, M., Op. cit.

⁵⁰ Elena Rodríguez Magallanes: "Documentación del Archivo del Tribunal Supremo". En: *Justicia en guerra : Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española: Instituciones y fuentes documentales* . Madrid : Ministerio de Cultura, 1990

A través de las listas y relaciones que se conservan del mencionado inventario, podemos hacernos una idea del estado en que se encontraba la Biblioteca, cuyos libros estaban repartidos por las distintas Salas y dependencias del Tribunal. Se conservan tres inventarios el primero, con fecha de 5 de mayo de 1939, organizado por materias, referido a los libros pertenecientes a diversas Salas de Justicia, con un total de 708 volúmenes, que se desglosan en civil (163), contencioso (154), social (107), criminal (284) ⁵¹. El segundo, de 13 diciembre 1939, es una relación de los tomos existentes en la biblioteca de la Secretaria General, por departamentos y título de la colección. El número total de tomos asciende a 722. La relación está firmada por el Encargado de la Sección de Archivo y Biblioteca, con sello de Jefatura. Auditoria de la 4ª Región Militar⁵². El tercero, lleva fecha de 2 de abril 1940:, comprende la relación de libros, por número de paquetes y tomos, que se envían del Tribunal Supremo de Barcelona, con un total de 98 paquetes.

La carencia de una biblioteca que satisfaga las necesidades de información de los miembros del Tribunal se reconoce de manera explícita en la Memoria relativa al anteproyecto del presupuesto del Tribunal Supremo para incluirlo en los Generales del Estado⁵³, redactada en septiembre de 1939 donde se escribe:

Se da el caso extraordinario de que en el Tribunal Supremo, primer Centro judicial de España, se carece de una Biblioteca propia; únicamente la Colección legislativa, algunas Enciclopedias jurídicas, diversos textos legales y casi ninguna obra doctrinal poseen las distintas Salas para la formación nada menos que de la jurisprudencia. La función judicial exige un estudio profundo y constante de la ciencia del derecho en general, base indispensable par resolver después con acierto los asuntos que le están encomendado y para cumplir esta alta misión(...). Esta situación no puede continuar; representa

⁵¹ Archivo Tribunal Supremo. Secretaria de Gobierno.Legajo 43722/1, Expediente 1

⁵² Secretaria de Gobierno,Legajo 43464. Ibid.

⁵³ La memoria tiene un párrafo introductor que refleja la ideología imperante de la época : *Llegado el momento de la normalización de la vida administrativa del Estado como consecuencia de la victoriosa cruzada que acabamos de presenciar, debida al gigantesco esfuerzo y al genio del Caudillo que supo llevar al Ejército de España por rutas gloriosas anunciadoras de una renaciente Patria, arrancada de las garras destructoras del marxismo y sacando de la nada a una nación con ansias de una vida nueva basada en los principios que informaron el Glorioso Movimiento, el Gobierno que ahora rige nuestros destinos, se ha propuesto como una de sus primeras resoluciones la formación de unos Presupuestos en los que se plasmen los nuevos moldes a que ha de ajustarse la vida oficial*

incomodidad y bochorno para los de dentro y revelaría una falta de atención a la justicia que representa uno de los principios básicos del Estado.

En abril de ese mismo año de 1939, se reintegra al servicio el Jefe de Archivo y Biblioteca, Sr. Lostau, quién había cesado en 1936⁵⁴, y permanecerá en su puesto hasta la jubilación, el 20 de febrero de 1955. Se crean también dos plazas de Auxiliares de Archivo, pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares de Archivo, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación Nacional, afectas al Tribunal Supremo.

La Biblioteca comienza con una consignación de 15.000 pesetas anuales para el sostenimiento de la misma. En 1940 se adquieren más de 200 obras que son seleccionadas por el Secretario de Gobierno, Javier Tornos. Asimismo, se solicitan a otras instituciones, como la Academia de Ciencias Morales y Políticas, donaciones de sus publicaciones para la formación y organización de la nueva biblioteca.

En ese mismo año, se abre un *Libro de Registro de Ingresos* que podría considerarse el acta de nacimiento de la Biblioteca, a través del cual podemos seguir el desarrollo de la misma y hacernos una idea de su crecimiento numérico, de la procedencia de cada una de las obras ingresadas, y de las necesidades e intereses de los usuarios. En el mismo se consigna: fecha de ingreso, autor, título de la obra, edición, lugar y año de impresión, volúmenes, tamaño, número de ejemplares y observaciones. El primer apunte tiene fecha de 2 de abril de 1940 y en ella se registra la compra de 5 Diccionarios de la Academia de la Lengua Española, impresos en Madrid, en 1939, al precio de 52 pesetas el ejemplar.

Los documentos de esta etapa, testimonian las penosas condiciones en las que se trabajaba en esos años de posguerra, así como la buena disposición del personal en solventar los numerosos problemas del servicio. En la contestación

⁵⁴ En la Memoria de 1944, el propio Lostau explica las razones de su cese:
Muy próximos a su fin estaban nuestros trabajos de la reorganización del Archivo del Tribunal Supremo, cuando en Agosto de 1936, fue declarado cesante el que suscribe por desafecto al gobierno rojo, no volviendo a ocupar su puesto hasta 1939 con la liberación de España, ¡tres años perdidos sin posible recuperación!

al cuestionario que se envía en 1942 a la Inspección General de Archivos,⁵⁵ el Sr. Lostau informa:

Debo llamar la atención de la Superioridad sobre la urgencia y necesidad de un subalterno, teniendo en cuenta que no es lo mismo servir un archivo que arreglarle y ordenarle (subrayado de Lostau). En el Supremo he tardado 7 años (descontando los 3 del Movimiento que estuve cesante por desafecto al gobierno rojo) y habiendo tenido que trabajar las horas extraordinarias y cargar con los legajos por no tener quien oficialmente ayudase a esas tareas manuales.

Además de la escasez de personal, hay que añadir la de las adversas condiciones climáticas que tenían los locales en los que se trabajaba, hasta el punto que en la memoria de 1941, el Facultativo pone de relieve que:

El haber disfrutado de un invierno benigno, nos ha permitido trabajar mas horas que anteriores años en aquel hermoso local, pero en el sótano, al norte y sin calefacción, causas que obligan casi a su clausura durante los 3 o 4 meses de este crudo invierno en Madrid.

En 1943, el mismo año que comienzan las obras para la instalación de la calefacción en el Archivo, toma posesión la Auxiliar María Escolar Guglieri, procedente de las Bibliotecas Populares de Madrid, y permanecerá en el puesto hasta su jubilación, en octubre de 1971.

María Escolar se ocupará del servicio de la Biblioteca y su reorganización, centrándose en la catalogación de sus fondos, en fichas normalizadas y cuyo catálogo se ordena por autores y materias⁵⁶. También ayuda en el servicio del Archivo del Tribunal⁵⁷, mientras el Facultativo Sr. Lostau se dedica por fin a reorganizar el Archivo de la Audiencia, que se había dejado hasta entonces por falta de medios y se encontraba en un *estado lamentable*.⁵⁸

⁵⁵ A.G.A. (5) 1.04/07, Sig. 31/7067

⁵⁶ Se debe a Melvil Dewey, bibliotecario de la Columbia College, la adopción del catálogo diccionario y de la cédula de tamaño internacional de 12,50 x 7,50 cm. para la redacción de los catálogos. Asimismo, Dewey ideó la ficha única de encabezamientos variables para la redacción de los catálogos, que no se aplicó hasta 1956.

⁵⁷ El cuadro de clasificación de fondos del Archivo en esos años es el siguiente: I. Sentencias originales del Tribunal Supremo. II. Pleitos, causas, rollos, apelaciones, etc. vistos por las Salas del Tribunal. III. Secretaría de Gobierno. IV. Biblioteca. V.-VI. Asuntos de la Secretaría de Gobierno. A.G.A. (05) 001.003 31/5143.

⁵⁸ Memoria del año 1943. A.G.A. (5) 1.04/1.07, Sig. 31/7067.

La biblioteca, que tiene que servir las necesidades de información de una plantilla compuesta por 31 magistrados, con su Presidente,⁵⁹ junto con el resto de los funcionarios y personal de justicia, ya cuenta por entonces con 7.739 volúmenes, de los cuales 1214 están instalados en los locales propios de las 4 Salas del Tribunal para uso de los magistrados, otros 2.105 ocupan una pequeña habitación y los libros mas modernas, que suman otros 4.000 se encuentran en el despacho del Archivo.

Con el presupuesto que el Ministerio de Justicia consigna para la Biblioteca del Tribunal Supremo, en 1943 se compran 32 obras, en su mayoría ediciones recientes. Asimismo, se invierte en encuadernaciones y la adquisición de un fichero metálico para albergar los catálogos de fichas normalizadas. Ya en la memoria de ese año, se anuncia también el proyecto de acondicionamiento de un local mas adecuado para albergar los crecientes fondos.⁶⁰

La nueva biblioteca, conocida en la actualidad como *Biblioteca antigua*, comienza su andadura en 1943, aunque no empieza a funcionar de forma regular hasta 1945, ocupando la segunda planta del edificio, al lado de los despachos de Presidencia. Un testimonio de primera mano nos lo proporciona el Sr. Lostau en la memoria de 1944, donde informa :

Sobre la saleta de los Sres. Magistrados de la Sala II, con entrada independiente, y por una escalera de mármol blanco, se llega a la Nueva Biblioteca, que es una sala de 9 metros de largo por 8 metros de ancho y una altura de 3,55, que recibe la luz por dos amplias ventanas que dan al patio segundo del edificio. Una completa instalación eléctrica permitirá su uso durante las tardes y las noches, ya que la idea es que permanezca abierta el mayor tiempo posible. También se la ha dotado de teléfono y calefacción.

La Biblioteca, situada en el piso principal, donde también radica el alto Tribunal, tiene una capacidad para unos 10.000 volúmenes, lo que resulta a todas luces insuficiente dadas las perspectivas de crecimiento de la misma. El problema de espacio se resuelve optando por dejar los libros menos interesantes, una vez

⁵⁹ Lasso Gaité, J.F. "Organización Judicial" En: *Crónica de la Codificación Española*. Vol. I. Madrid: Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, 1999. p.336

⁶⁰ Memoria 1943. Ibid.

catalogados, como depósito en la planta sótano donde se encontraba el Archivo.

Los fondos se ordenan por número currens y se idean etiquetas para los tejuelos, que se adornan con marbetes y exlibris, originales del Sr. Escudero. Estos tejuelos, con pequeñas modificaciones, todavía se utilizan en la actualidad, aunque resultan poco prácticos ya que apenas queda espacio para la numeración manuscrita.

Durante el año 1944 se invierten 10.000 pesetas para encuadernaciones y adquisiciones de 100 obras en 214 volúmenes, entre las que se cuenta el *Derecho Civil de Enneccerus*, la *Enciclopedia Jurídica de Seix*, la *Historia de España* de Ballesteros, etc. Además, se continúan con los trabajos de catalogación y confección de las fichas catalográficas, y en septiembre de 1945 se publica un *Índice abreviado del Catálogo sistemático de los libros existentes en la Biblioteca y Salas del Tribunal Supremo*, repartiéndose copias del mismo por las diferentes Salas para conocimiento del personal. En el mismo, las obras aparecen clasificadas por materias, y cada materia por orden alfabético de apellidos de autores, constando también el lugar y fecha de edición, así como un índice numerado para poder encontrar mejor las obras ⁶¹.

⁶¹ El índice de materias tiene la siguiente distribución:

- Obras Generales: Ciencia. Cultura; Bibliografía. Catálogos; Revistas; Enciclopedias; Ensayos. Conferencias; Anuarios. Almanagues; Boletines; Corporaciones Sociedades.
- Filosofía: Filosofía; Psicología; Moral. Ética.
- Religión: Religión. Teología.
- Ciencias Sociales: Sociología. Sociografía; Estadística. Demografía; Política; Estado y sus formas; Política Internacional. Colonización; El Movimiento Nacional. Falange Española Tradicionalista y de la J.O.N.S.; Economía Política y Social; Economía Financiera. Banca, Bolsa, Crédito y Moneda; Cooperación. Mutualidades; Enseñanza. Educación.
- Derecho: Derecho administrativo; Administración local; Administración. Personal. Clases Pasivas; Derecho canónico; Derecho general; Derecho general y Derecho civil. Obras clásicas y antiguas; Derecho civil; Derecho civil foral de Aragón; Derecho civil foral de Cataluña; Derecho civil foral de Navarra y Vizcaya; Códigos civiles españoles antiguos y modernos; Comentarios, Estudios y Jurisprudencia al Código civil español; Códigos civiles extranjeros; Estudios sobre materias de derecho civil; Arrendamientos; Divorcio; Propiedad. Rústica y Urbana; Derecho hipotecario y notarial; Derecho internacional; Derecho internacional privado; Derecho internacional público; Derecho de Marruecos; Derecho mercantil; Derecho mercantil marítimo; Ciencia militar; Derecho militar; Derecho penal. Penitenciario; Medicina legal; Derecho político; Derecho público. Constitucional; Derecho procesal. Contencioso-Administrativo, civil, penal, laboral y social; Derecho romano; Derecho social. Trabajo, Seguros, Organización corporativa, corporativismo; Estudios jurídicos; Filosofía del derecho; Hacienda; Jurisprudencia; Legislación. Colección legislativa. Leyes, etc.; Tribunales; Varios.
- Filología: Filología inglesa; Filología francesa y alemana; Filología Española. Diccionarios de la lengua; Diccionarios de ciencia y de derecho; Filología clásica; Filología. Otras lenguas.
- Ciencias Puras y Ciencias Aplicadas: Manuales Soler.
- Bellas Artes: Artes y oficios artísticos; Urbanización.
- Literatura: Literatura española.
- Historia y Geografía
- Historia: Historia general; Historia de España; Ordenes militares; Historia de América.
- Geografía: Geografía; Geografía descriptiva. Viajes; Biografías.

En junio de 1945 toma posesión como Presidente del Tribunal Supremo, el Catedrático de Derecho civil y Magistrado de la Sala Primera, José Castán Tobeñas, y desempeñará su cargo hasta enero de 1968. Durante su larga presidencia, se reorganiza el Tribunal Supremo, cuyo número de magistrados pasa de 20 a 41, y se fija en 4 el número de Salas, por desdoblamiento en dos de la Sala Tercera, de lo contencioso administrativo, a raíz de la Ley 18 de marzo de 1944, que aumenta las atribuciones del Supremo en esta materia ⁶²

El Sr. Castán, refleja gran interés por los libros, con la publicación de una extensa obra bibliográfica , entre la que se encuentran veinte *Discursos de apertura de Tribunales*⁶³ sobre temas de actualidad. A la biblioteca le concedió una especial atención; siendo prueba de ello el creciente número de volúmenes que viene a engrosar el fondo de la biblioteca durante los años de su presidencia⁶⁴, muchos de ellos donados por el propio Castán.

Sin embargo, el problema de personal subsiste; *“apenas dos personas para atender el gran movimiento de fondos que hay en los dos archivos y la biblioteca “*, informa Lostau⁶⁵.

El movimiento de la Biblioteca en cuanto al número de fondos y prestación de servicios, entre los años 1947 y 1953, es sustancial⁶⁶. Teniendo en cuenta las memorias de esos años, en 1947 con un presupuesto de 10.000 pesetas para adquisiciones de obras y encuadernaciones a cargo del propio Tribunal, se registran :

Obras ingresadas: 102 en 134 volúmenes, entre las que se cuentan 16 donativos.

Préstamos: 502

Devoluciones: 443

⁶² Lanero Táboas, M. Op. cit. p.186

⁶³ Estos discursos se realizan el primer día hábil de cada año en una ceremonia solemne donde asiste el Jefe del Estado. Esta costumbre se remonta a una Real Cédula de Carlos IV de 19 de noviembre de 1790 que mandaba leer las Ordenanzas del Consejo de Castilla en la primera sesión de cada año. La legislación actual se remonta al Real Decreto de 31 de marzo de 1868.

⁶⁴ Según el Libro de registro de ingresos, de 1945 a 1968 se contabilizan la entrada de 4.084 obras.

⁶⁵ Memoria del año 1945. Ibid

⁶⁶ Véase partes trimestrales que se envían a la Inspección General de Archivos. A.G.A. (5) 1.04/1.07 Sig. 31 /7067

Lectores: 3 diarios

Por otro lado, el movimiento de la biblioteca en 1951 es el siguiente:

Obras ingresadas: 1.925

Préstamos: 1.925

Devoluciones: 1.745

Lectores: 1018⁶⁷

Además, en ese mismo año de 1951 resaltan tres hechos sobresalientes: uno, la contratación de un ordenanza para el archivo, el cual solventará en parte, el creciente aumento de trabajo; dos, la constitución de una Comisión de expurgo en el Archivo de la Audiencia, en cumplimiento de las órdenes del Ministerio de Justicia; tres, la publicación del Catálogo de la Biblioteca del Tribunal Supremo.

En la celebración del solemne acto de apertura de los tribunales, el 15 de septiembre de 1951, se presenta y reparten los primeros ejemplares del *Catálogo Sistemático de la Biblioteca*, publicado por la editorial Reus de Madrid. Merece la pena echar un vistazo a la Memoria de 1951, donde el Sr. Lostau nos habla de las vicisitudes anejas a la realización del mencionado Catálogo:

Conociendo la gran utilidad de un catálogo impreso, el actual Presidente y también protector de la Biblioteca, Sr. Castán, puso gran empeño en la publicación del que nos ocupa, labor pesada y meticulosa, por haberse acordado que para mayor utilidad, fuese un catálogo de materias.

Un año entero de trabajos y todo el verano dedicado por la Srta. Escolar en la corrección de pruebas, dio por resultado la aparición de las 331 páginas, bien impresas(...). Gracias a los desvelos de esta funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, la que por cierto no ha recibido aún ninguna felicitación de ninguno de los dos Ministerios.

Cerca de 30.000 pesetas ha costado al Tribunal Supremo el lujo de publicar el Catálogo de su Biblioteca, atendida por funcionarios del Cuerpo de Archiveros.

Por lo que se refiere a la clasificación de materias del Catálogo, éste es muy similar al Índice de 1945, si bien con más subdivisiones.

⁶⁷ El número de lectores es aproximado. Ya en la memoria anterior del año 1950 se indica que no se lleva estadística de los mismo, *dado el tipo de los lectores que atiende la biblioteca*.

Cesado el Sr. Lostau, en 1955, Ana Pardo García asume la dirección del Archivo y Biblioteca del Tribunal Supremo y la Audiencia Territorial, hasta 1963, que cesa porque se traslada al Archivo Histórico Nacional. Los documentos de la época testimonian que la gestión de estos servicios tampoco debió resultarle fácil a la nueva funcionaria. En una carta particular al Director General de los Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación Nacional, donde la Sra. Pardo pide más medios económicos para continuar con la reorganización del Archivo de la Audiencia, que había empezado años atrás el Sr. Lostau, expresa sus quejas:

No podemos pasarnos la vida oficiando que no encontramos los asuntos, y no se querrá pretender que con sólo el Facultativo (que ha de atender también el Archivo del Tribunal Supremo y su Biblioteca), un agente judicial y un jornalero⁶⁸, se atiendan los servicios diarios y se organice un Archivo en el que estaba todo por hacer [subrayado de Pardo], de la categoría y volumen de la Audiencia Territorial de Madrid.⁶⁹

A pesar del escaso personal, la Biblioteca publica en 1957 un *Apéndice al Catalogo Sistemático de su Biblioteca* que reparte a los magistrados de las 6 Salas que conforman el Tribunal Supremo, y al personal de otros servicios. En su hoja introductoria aparece una cariñosa dedicatoria manuscrita de la bibliotecaria Maria Escolar, que reza: “Al Ilmo. Sr. D. Javier Tornos Lafite, Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, a quién tanto debe esta biblioteca, con todo respeto y cariño”.

En la Biblioteca se conserva el *Libro de Registro de Préstamos*, que se abre el 12 de abril de 1956, y a través del cual podemos calcular el movimiento de usuarios que tenía entonces la biblioteca, aunque se desconoce el reglamento del mismo. Así vemos que en los años judiciales que van de 1956 a 1971, fecha en que comienza el segundo libro, hay una media de 500 préstamos, cuyos destinatarios son en su mayoría magistrados y funcionarios judiciales.

En los años sesenta, en consonancia con la etapa política de desarrollismo y modernización iniciada en España durante la Dictadura, se propone una

⁶⁸ Esa Dirección General habilitaba créditos para el pago de jornales, con el fin de poder contratar personal eventual. Un jornalero venía a cobrar en 1957, 20 pesetas diarias.

⁶⁹ (A.G.A. N° IDD 03)109.01; Top. 12/25; Sig. 64

reforma total de la justicia en su organización y en sus procedimientos. La reforma se encamina en tres direcciones: legislación procesal, sistemas de enjuiciamiento y organización de servicios.⁷⁰ Con referencia a la organización, el Ministro Iturmendi, con ocasión de la apertura de Tribunales del año 1964, resalta la importancia del factor humano en la función judicial, así como la necesidad de contar con métodos, medios e instrumentos de trabajo adecuados.⁷¹

La Biblioteca va formándose y desarrollando sus servicios poco a poco. En la memoria de 1964 se contabiliza el ingreso de 195 folletos y 265 obras en 340 volúmenes. Asimismo, se han encuadernado 267 volúmenes, los préstamos ascienden a 862 obras y la media de lectores se calcula en 11 personas. La plantilla del Archivo y de la Biblioteca sigue siendo exigua. Se compone de un total de ocho puestos de trabajo: un director, tres auxiliares, de los cuales dos están adscritos a la biblioteca, dos subalternos, un mozo, un jornalero eventual⁷². No es de extrañar que ante la insuficiencia de personal, María Escolar tenga que hacer horas extraordinarias pagadas en la biblioteca, según se refleja en un oficio de 10 de abril de 1965.

En enero de 1964 toma posesión María de los Remedios Muñoz, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, quien ocupará el puesto de Directora del Archivo y la Biblioteca hasta su cese por jubilación, en 1983. En su dilatada carrera profesional en el Tribunal Supremo, Remedios Muñoz presenciará el nombramiento de cuatro presidentes⁷³, cuyos mandatos, a pesar de los buenos propósitos e intenciones, no resolverán los problemas fundamentales de la Biblioteca.

⁷⁰ Lasso Gaité, J.F.(1998),Op.cit. p. 347-348

⁷¹ Iturmendi Bañales, A.,*Perfeccionamiento de la organización y procedimiento de la justicia. Discurso leído por el Excmo. Sr.D.... Ministro de Justicia en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada el 15 de septiembre de 1964*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 1964

⁷² Cuestionarios para la Clasificación de Puestos de Trabajo, enviados a la Inspección Central de Archivos el 22 de diciembre de 1964.

⁷³ (Francisco Ruiz-Jarabo y Baquero(12-1-1968/11-6-1973), Valentin Silva Melero (12-7-1973/11-7-1977), Angel Escudero del Corral (2-8-1977/23-10-1980), Federico Carlos Saíz de Robles Rodríguez (23-10-1980/1985)

En un informe que se envía al Presidente en 1981, cuando apenas le faltaban dos años para su jubilación, la Sra. Muñoz informa:

*La Biblioteca del Tribunal Supremo, creada como elemento auxiliar de trabajo para los Magistrados y demás personal de la Administración de Justicia, tiene planteados tres problemas fundamentales que le impiden cumplir su misión: falta de medios económicos, falta de personal auxiliar y falta de locales para depósitos de libros*⁷⁴

En el plano económico, la Biblioteca contaba con una consignación anual de 196.000 pesetas que resulta insuficiente para atender la adquisición de libros, suscripciones de revistas, encuadernaciones y gastos de material de oficina.

En sus propuestas de mejora, la Directora expone la necesidad de mantener la consignación actual para atender a los gastos del Centro, sin incluir el de la adquisiciones de obras, para lo que sería imprescindible como mínimo, un crédito de dos millones de pesetas, con el fin de modernizar el fondo bibliográfico. Del fondo bibliográfico de la biblioteca se apunta que *hay parcelas jurídicas casi totalmente desatendidas tanto en obras doctrinales como en monografías y publicaciones periódicas, sin contar con la necesidad de mantener al día la colección de textos legales, instrumentos de trabajo imprescindibles para los Magistrados.*

Se expone la falta de personal auxiliar mecanógrafo, que colabore con el especializado y realice las tareas administrativa y las repetitivas de fichas, boletines informativos, etc. Como consecuencia de esta situación, se informa que la biblioteca cuenta con más de 500 obras del fondo bibliográfico antiguo, cuyas fichas secundarias y de materias no se habían podido realizar. A ello se añade el vaciado de revistas, *labor tan interesante y fundamental en una biblioteca moderna, que ha quedado limitado a las cuatro o cinco más importantes, de las 30 revistas recibida.*

Las propuesta de mejora de este capítulo se centran en el nombramiento de tres auxiliares mecanógrafos; de los cuales: uno se encargaría de las tareas administrativas de la Biblioteca: registro de obras de nuevo ingreso, control de

⁷⁴ Informe de la directora de la biblioteca al nuevo Presidente del Tribunal Supremo sobre la situación y necesidades del Archivo y de la Biblioteca del Tribunal Supremo, enviado el 23 de enero de 1981.

revistas, servicio de préstamo, etc, y los otros dos de los trabajos mecanográficos. También se propone que el botones asignado a la Biblioteca quede con carácter fijo y exclusivo para el servicio de ésta, “máxime, si como se proyecta, la ubicación de los fondos bibliográficos va a ser en distintas plantas de edificio.

Otros puntos débiles son: la falta de equipamiento en máquinas de escribir y de fotocopidora, la falta de locales donde instalar los nuevos fondos y el personal que ha de trabajar con ellos. Ante la imposibilidad material de conseguir un gran depósito general, se propone, distribuir los fondos bibliográficos en varios grupos, atendiendo a su valor intrínseco o de frecuente consulta, entre los distintos locales. En el local de la biblioteca, situada en la planta noble del edificio, quedarían instalados: obras doctrinales fundamentales, monografías modernas, diccionarios, colección legislativa, de jurisprudencia, textos legales y revistas de los últimos diez años.

5.Desarrollo (1980-2006)

A partir de los años ochenta, la nueva configuración del Estado que se produce con el Estado de las autonomías y la incorporación de España a la Comunidad Europea, impondrán importantes cambios en la Administración de Justicia. La reforma comienza hacerse realidad, con toda una serie de medidas legislativas, que arrancan de la nueva Constitución democrática de 1978 y que tendrá sus repercusiones en la estructura y funciones de la Institución y en su Biblioteca, la cual termina por convertirse en un verdadero servicio de acceso a la información en el proceso de toma de decisiones de los juristas de la Institución.

La publicación en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial⁷⁵ legaliza un Gabinete Técnico de Información y Documentación⁷⁶, creado por Real Decreto 489/1985, como pieza clave para la modernización de la oficina judicial, bajo la dependencia directa del Presidente del Tribunal Supremo e integrado en la actualidad por 6 Magistrados, uno de los cuales ostenta la Jefatura, y por un

⁷⁵ modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

⁷⁶ Art. 163 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio

cuerpo de 35 Letrados⁷⁷ que tienen como misión asistir técnicamente al Presidente y a la Salas del Tribunal. Entre las funciones del Gabinete ⁷⁸ se encuentran la de coordinar los servicios de la Biblioteca, al frente de los cuales se encuentra un Magistrado Jefe al que hay que añadir el personal propio de la Biblioteca.

En diciembre de 1988, se culmina, a nivel legislativo, el proceso de reorganización de la Administración de justicia⁷⁹, con la promulgación de la Ley Orgánica de Demarcación y Planta Judicial. Entre otras innovaciones esenciales, esta Ley equilibra la composición de las Salas del Tribunal Supremo, cuya estructura queda configurada por cinco Salas: La Primera, de lo Civil; la Segunda, de lo Penal; la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; la Cuarta, de lo Social; y la Quinta de lo Militar. Estas Salas, a su vez, se subdividen, en una o varias secciones. Sin olvidar otras Salas especiales y órganos de gobierno que tienen su sede en el mismo Tribunal.

Por lo que se refiere al funcionamiento del Tribunal, el reparto de asuntos se hace por acuerdo de la Sala de Gobierno, acordándose las decisiones por mayoría, aunque se pueden formular votos particulares en caso de disentir esa mayoría.

Con la desaparición de algunos órganos y la creación de otros, a raíz de la nueva Ley del 88, el edificio del Palacio de Justicia va a sufrir otra gran remodelación, con un aprovechamiento más racional de los locales desocupados, con el fin de que se destine exclusivamente a albergar la sede del Tribunal Supremo.

⁷⁷ En 2006 el número de Letrados se ha duplicado con el objetivo de ayudar a los órganos decisorios y poder sacar el cúmulo de asuntos que tiene el Tribunal. La colaboración de estos letrados se centra en la búsqueda de antecedentes, documentación, elaboración de proyectos de resoluciones, estudio de asuntos repetidos o seriados sobre los que el Tribunal ya se ha pronunciado, así como la preparación de autos de inadmisión.

⁷⁸ Véase: Urbano Castrillo, E. de: "Los gabinetes técnicos de los grandes tribunales". Op. cit. pp.125-143

⁷⁹ La planta judicial está compuesta por los siguientes órganos jurisdiccionales: Juzgados de Paz; Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria; Audiencias Provinciales; Tribunales Superiores de Justicia; Audiencia Nacional; Tribunal Supremo.

El nuevo edificio del Tribunal Superior de Justicia, que sustituye a la desaparecida Audiencia Territorial, se ubica en la antigua *Casa de Canónigos*, sita cerca del Palacio, en la Plaza de la Villa de Paris, y el Colegio de Abogados, con su gran biblioteca, abandona definitivamente el Palacio a principios de los años noventa. Con el vaciamiento y traslado de la Biblioteca del Colegio de Abogados, se inicia el proyecto de instalación de la actual Biblioteca del Tribunal Supremo en los mismos locales que ocupaba aquella, pero cuyo proceso durará todavía años.

Durante los cuatro años que duraron las obras de remodelación del Palacio (1992-1995), los usuarios se vieron privados de poder frecuentar y consultar la antigua Biblioteca del Colegio de Abogados, cuyos fondos ya habían sido trasladados, sino también de su propia Biblioteca depositada casi en su totalidad, al igual que el Archivo, en una empresa de custodia externa. Sin embargo, esta carencia se resarciría pronto con el desarrollo de la Política de Información, promovida por el Consejo General del Poder Judicial⁸⁰ que dará un nuevo impulso a las bibliotecas judiciales y, en particular, a la Biblioteca del Tribunal Supremo.

No hay duda, según se refleja en las Memorias anuales de la Institución, que la Biblioteca necesitaba de una reforma urgente en el mismo año que empiezan las obras. Los catálogos no sólo eran poco uniformes, debido al trasiego de personal que catalogaba, sino también se encontraban sin actualizar. Más importante era la carencia de un fondo documental adecuado a las nuevas materias, como el derecho comunitario, y la inexistencia de bases de datos y otras herramientas documentales que apoyaran la nueva práctica jurídica⁸¹.

⁸⁰ El Consejo General del Poder Judicial es configurado en la Constitución de 1978 como el órgano de gobierno del poder judicial, integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside y por veinte vocales nombrados por el Rey. La Ley Orgánica 6/1985 define sus funciones

⁸¹ Para Urbano, Magistrado del Gabinete Técnico, *la necesidad de disponer de una información legislativa completa y actualizada; de las últimas sentencias de los Tribunales europeos o del Comité de Derechos Humanos de las NNUU; de un tratamiento de la doctrina constitucional que va creando el Tribunal Constitucional; de las últimas aportaciones doctrinales tanto en libros como en artículos de revistas(...), se ha convertido en algo fundamental, para los órganos que tienen atribuidas las máximas competencias en materia de resolución de recursos y de unificación de doctrina*. Op. cit. p.132

El desarrollo de la Biblioteca del Tribunal Supremo da un giro con la Política de Información formulada a principios de los noventa por el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de representación de los jueces⁸², cuyo Presidente asume asimismo la presidencia del Tribunal Supremo. El diseño, la implementación y la coordinación la confía el Consejo a su órgano técnico, el Centro de Documentación Judicial (Cendoj),⁸³ el cual a su vez tiene que contar con la colaboración del Ministerio de Justicia y, en su caso, con las distintas Comunidades Autónomas que ya tienen transferidas las competencias en justicia, en todo lo que se refiera a medios materiales y de personal.

Se trata de una actuación pro-activa por parte de la Administración enmarcada dentro del proceso de modernización e informatización de la justicia. Así, en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 25 de noviembre de 1992, se aborda el Plan de Bibliotecas Judiciales cuyo objetivo principal es solucionar de forma satisfactoria las necesidades de información y documentación de los órganos judiciales.⁸⁴

En la declaración de objetivos se puede entrever la preocupación de dotar a la Administración de justicia de medios adecuados para hacer frente al incremento exponencial en volumen y complejidad de la legislación y, en general de la literatura referida a la ciencia del derecho. Además, como resultado de estas tendencias, se reconoce que las necesidades de información y documentación de los profesionales de la judicatura seguirán creciendo, mientras que el tiempo disponible para que ellos y su personal obtengan y asimilen esta información progresivamente disminuirá. De ahí, la importancia de bibliotecas y centros de documentación bien equipados que satisfagan dichas necesidades.

⁸² El Consejo General del Poder Judicial se configura en la Ley Orgánica del Poder Judicial como órgano constitucional de poder. Según el artículo 122.2 de la CE es el órgano de gobierno del Poder Judicial.

⁸³ El CENDOJ se crea por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 7 de mayo de 1997, como órgano técnico del Consejo que tiene encomendada reglamentariamente la selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencia y doctrinal.

⁸⁴ Álvaro Bermejo, C., Sanz de Ormazábal, I., Cueto Aparicio, M. "El Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial". En : *Los sistemas de información al servicio de la sociedad: VI Jornadas Españolas de Documentación*. Valencia: FESABID, 1998. pp. 73-84

Los objetivos específicos del Plan de Bibliotecas Judiciales de España se dirigen a:⁸⁵

- 1.- Incrementar las instalaciones bibliotecarias y dotarlas de locales adecuados y personal que estuviera al cargo de ellas.
- 2.- Dotaciones bibliográficas para las distintas bibliotecas, de modo que éstas se conviertan en una fuente operativa y eficaz de información técnica y documental para jueces y magistrados. Se pretende, asimismo, confeccionar directrices general de préstamo bibliotecario.
- 3.- Automatización de bibliotecas con la instalación de un Sistema Integrado de Biblioteca, Absys, que facilitará todas las operaciones y procesos de la actividad bibliotecaria y la creación de un Catálogo Colectivo en línea,⁸⁶ que revolucionará la forma de acceso y recuperación de la información, reforzando la cooperación bibliotecaria.

A finales de los años noventa, la Biblioteca, instalada en sus nuevos locales y formando parte del Gabinete Técnico en el organigrama de la Institución, experimenta una reorientación con el fin de constituirse en un verdadero centro de acceso al conocimiento y de servicios de información dirigidos a sus usuarios, con el uso intensivo de las tecnologías de la información. El proceso de adaptación de la Biblioteca a esta nueva misión no ha sido fácil y muchas propuestas de mejora todavía penden en el aire.

5.1. La Biblioteca en la actualidad : examen de la situación actual

Los cambios producidos en el mundo de la información y en los hábitos de trabajo con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, unido a los cambios producidos en el marco del sostenimiento del denominado *Estado de bienestar* - reducción del gasto público y coste de los servicios, mejora de la eficacia, eficiencia y competitividad de las administraciones, creciente demanda en la calidad de la prestación de los

⁸⁵ Sanz de Ormazábal, I., Lasa Jáuregui, J., "Red de bibliotecas judiciales: situación y estudio de conectividad". En: *Revista del Poder Judicial*, nº 56, 1999, pp. 251-271

⁸⁶ Esto fue posible gracias a los avances normalizadores tanto de las herramientas como de los procesos, con el fin de lograr un idioma común.

servicios públicos - , han afectado al entorno externo e interno de la Biblioteca, en general.

Para conocer bien la organización es prioritario identificar los factores externos e internos que le afectan y condicionan su actuación. Asimismo, interesa realizar un análisis SWOT ⁸⁷ para detectar las oportunidades y las amenazas con que puede encontrarse, así como los puntos fuertes y débiles con el fin de articular una serie de propuestas de mejora

A) Análisis del entorno externo

La Biblioteca no funciona aislada del medio que la rodea, sino que se encuentra condicionada por la cultura corporativa, la estructura de la institución a la que pertenece y por la gestión global.

a) Factores que afectan a su macroentorno:

- *Cambios en la legislación, la política y economía.*

Este tipo de biblioteca, al depender directamente de la administración, se encuentra condicionada por la orientación política y económica del país que puede determinar el crecimiento o disminución de sus presupuestos y, por tanto, de sus recursos (*Oportunidad/Amenaza*) e, incluso, su gestión. En estos momentos, sin embargo, la orientación es positiva debido al aumento sustancial del presupuesto en determinadas partidas, como la adquisición de fondos.

- *Las modificaciones del mercado de las tecnologías de la información.*

Oportunidad: incorporación de nuevas herramientas que facilitan el trabajo y proporcionan un mayor servicio.

Amenaza: Aumento del gasto de instalación y funcionamiento de sistemas informáticos y nuevos soportes que repercute negativamente sobre otros gastos, como el gasto de personal.

Propuesta de mejora: participar activamente en la elaboración del presupuesto anual que emana de la entidad que afecta directamente a la

⁸⁷ SWOT es un acrónimo formado por las iniciales de Strengths (*fuerzas*), Weaknesses (*debilidades*), Opportunities (*oportunidades*) y Threats (*riesgos*).

unidad, con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas del servicio.

b) Factores que afectan a su microentorno:

- Relaciones interbibliotecarias.

Una de las primeras justificaciones para la implantación de la automatización en la Biblioteca, efectuada a finales de los años noventa donde se empezó a utilizar el sistema informático Novalib, fué la catalogación compartida⁸⁸ y el catálogo en línea.

Hacia el año 2000 se puso en marcha la red de bibliotecas judiciales, cuyo Catálogo colectivo es gestionado por el programa Absys y coordinado por la Sección de Documentación y Derecho comparado del Cendoj,⁸⁹ con la colaboración de los profesionales de los distintos centros bibliotecarios que forman la Red de bibliotecas judiciales.

Oportunidades: ahorro de costes de catalogación; aumento del intercambio de documentos entre bibliotecas integrantes en el catálogo; mayores contactos amistosos y comunicación entre bibliotecas.

Amenaza: Falta de sincronización debido a la carencia de un Reglamento común que normalice los servicios.

Propuestas de mejora: Aunar esfuerzos para la redacción y divulgación de un reglamento común a todas la bibliotecas que integran la red.

Reforzar la cooperación y conexión con otros organismos.

- Perfil Usuarios:

Como se apunta en la introducción, desde un punto de vista general, los usuarios del servicio se encuadran en usuarios con plenitud de derechos y usuarios con derechos restringidos. No hay que olvidar que la Biblioteca se diseña para prestar servicio a los miembros de la Institución, siendo éstos sus principales usuarios. En la actualidad la plantilla del Supremo es de 99

⁸⁸ El Glosario de la ALA define la catalogación cooperativa o compartida como la *Catalogación original de piezas bibliográficas por la acción conjunta de un grupo de bibliotecas "independientes" que ponen los registros bibliográficos a disposición de los miembros del grupo y también a veces, de las bibliotecas que no forman parte de este.*

⁸⁹ Entre las funciones encomendadas a esta Sección se encuentran la de gestionar, con la colaboración que se precise, la actualización e instalación de las bibliotecas judiciales, sistematizar su régimen de funcionamiento y asegurar su conservación.

magistrados ⁹⁰(un presidente, 5 presidentes de Sala, 74 magistrados y 19 eméritos) y el total de efectivos es de 652 personas.

Para desempeñar su labor, los usuarios necesita ,sobre todo, información sobre legislación, jurisprudencia, doctrina y bibliografía. Son usuarios que necesitan una atención especializada, muchos no utilizan las Nuevas Tecnología y los servicios tienen que ser eficiente, eficaces y adecuados a sus demandas.

Oportunidad: El hecho de que la mayor parte de los usuarios reales trabajen en el mismo centro donde se ubica la biblioteca, facilita el poder tener un conocimiento más cercano de lo que éstos necesitan y el servicio que se les puede ofrecer.

Amenaza: endogamia en la provisión de servicios, y el descuido en la atención de los usuarios potenciales y sus necesidades.

Propuestas de mejora: Desarrollar mecanismos que potencien el papel de la Biblioteca en la Institución. En este sentido la Biblioteca no solo debe atender la demanda explícita, sino también debe hacer surgir la demanda subyacente, como preconiza el *Manifiesto de la UNESCO*.

B) Análisis del entorno interno

- Servicios

En la actualidad, las funciones de la Biblioteca, según los principales tipos de actividad y servicios⁹¹ que presta pueden clasificarse en los siguientes:

- a) Área de Selección y Adquisición: realiza la gestión del presupuesto, de los proveedores, de los pedidos, de las suscripciones y renovaciones, de las obras ingresadas, así como de las publicaciones electrónicas.

⁹⁰ A la categoría de magistrado del Tribunal Supremo se puede acceder por varias vías: quienes acrediten más de diez años como magistrado; quienes, no reuniendo dichos requisitos, hayan adquirido la condición de magistrados a través de las correspondientes pruebas selectivas de especialización, así como los juristas de reconocida competencia que tengan más de quince años en el ejercicio de su profesión. En todos los casos, la decisión recae en el Consejo General del Poder Judicial.

⁹¹ En el año 2000, la llegada de un nuevo Consejero Técnico y seis documentalistas prometía la subdivisión de esta Biblioteca Especializada en dos secciones: Biblioteca y Documentación. Diversas circunstancias hicieron fracasar el proyecto. Hay que apuntar, sin embargo, que en la actualidad las funciones y servicios de una biblioteca especializada y un centro de documentación, son similares; de ahí que muchos autores no hagan distinción en su terminología. Tanto las bibliotecas especializadas como los centros de documentación aglutinan, tratan y difunden información relativa a un tema o grupo de temas afines, de la manera más rápida y eficaz posible, aplicando las mas novedosas técnicas documentales.

- b) Área de catalogación y clasificación: lleva a cabo el análisis formal y del contenido de las obras ingresadas en la biblioteca, y la ubicación del documento con la signatura topográfica para su recuperación.
- c) Área de referencia e información bibliográfica: proporciona información y orientación bibliográfica de forma presencial o virtual, realizando todo tipo de búsquedas a través del catálogo automatizado y otras fuentes de información. Además realiza la gestión de la difusión selectiva de la información (D.S.I) según perfiles de usuarios y la elaboración de productos documentales (revista de novedades, catálogos, dossier, etc.)
- d) Área de acceso al documento : gestiona las necesidades de información formuladas por los usuarios, el préstamo a domicilio, el préstamo permanente para los miembros de la Salas, el de lectura en sala y el interbibliotecario. Además, se encarga de los depósitos donde se almacenan los fondos bibliográficos.

Puntos fuertes:

- Buena disposición y satisfacción del usuario con el personal de la biblioteca
- Plazos distendidos de préstamo de monografías para los usuarios de pleno derecho

Puntos débiles:

- Baja demanda de formación de usuarios
- Falta de seguimiento de la D.S.I.
- Se hecha de menos un mecanismo que ofrezca un panorama global y en profundidad de la opinión de los usuarios con respecto a los servicios que se ofrecen.

Propuestas de mejora:

- Cursos de formación de usuarios, con el fin de que éstos dispongan de mayor autonomía en la búsqueda de información y la realicen con la mayor efectividad y menos pérdida de tiempo.
- Mayor desarrollo de la Difusión Selectiva de Información, reforzando la colaboración con los Magistrados y Letrados.
- Reforzamiento del área de referencia e información bibliográfica, donde tienen lugar las demandas mas importantes de los usuarios.

- Aplicación de métodos de evaluación periódica del servicio con el fin de determinar el nivel de calidad con que se satisfacen los requerimientos de información de los usuarios.

- Recursos Humanos

En los tiempos que corren donde la información en derecho y las ciencias jurídicas crecen exponencialmente en volumen y complejidad, como reflejan los estudios bibliométricos y webométricos, el personal constituye uno de los recursos mas valiosos de la Biblioteca para alcanzar su misión. Como apunta Garcia Palomeque y Pérez Campos, la figura del documentalista es decisiva, en la actividad diaria de los profesionales del derecho que no pueden permitirse el lujo de dedicar su tiempo a la gestión, búsqueda y selección de la información que necesitan.⁹²

La plantilla de la Biblioteca esta integrada en la actualidad por el siguiente personal: una Jefa de Biblioteca, funcionaria de carrera del grupo A de la Administración General del Estado, una Funcionaria del antiguo Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, encargada de la sección de documentación, ocho funcionarios del Cuerpo de la Administración de Justicia (un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, seis del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial).

Entre los rasgos distintivos del personal de este tipo de biblioteca cabe resaltar los siguientes: conocer la jerga jurídica, competencia para responder con relevancia, precisión y rapidez a las solicitudes de información; capacidad de coordinación para evitar duplicidades y desperdicio de tiempo; estar al día con las cuestiones de actualidad que afecten a la Institución para anticiparse a las peticiones de los usuarios.

Los hábitos de trabajo han de adaptarse a la utilización de las tecnologías de la información. Para ello es importante que el personal conozca no solo su

⁹² Garcia Palomeque, R. y Pérez Campo, R. "Las nuevas tecnologías: un paso adelante en la documentación jurídica. En: *Biblioteconomía i documentació*. 2003, nº10 juny.

colección, sino también lo que hay en las redes, seleccionar lo más importante, analizar la calidad de lo existente, organizarlo y ponerlo a disposición del usuario.

Puntos débiles:

- No existe en la actualidad una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que defina las plazas de los perfiles profesionales, existiendo una inadecuación entre las responsabilidades asignadas (como por ej. auxiliares que realizan el proceso técnico) y los Cuerpos, categoría y niveles.
- Formación profesional del personal inadecuada, debido a la falta de un Plan General de Formación y presupuestos para el mismo. Se resalta el esfuerzo realizado por algunos trabajadores que han asumido y financiado personalmente su formación para realizar adecuadamente su trabajo.
- Falta de incentivos económicos y promoción del personal dentro de la Biblioteca, lo que redundaría en la insatisfacción del mismo. La mayoría de los funcionarios de la Administración de justicia que quieran promocionar deberán hacerlo en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa al servicio de la Administración de Justicia y desempeñar funciones completamente distintas a las que vienen realizando, lo que supone una pérdida para la Biblioteca.
- Poca estabilidad en el puesto de trabajo de los funcionarios de la administración de justicia que desempeñan sus servicios en la Biblioteca, los cuales pueden ser removidos de sus puestos a otros puestos más acordes con la oposición que han realizado, pero inadecuada a su experiencia laboral.
- Insuficiencia de medios humanos para la carga actual de trabajo, determinado por una mayor tasa de uso de la Biblioteca, el crecimiento de la colección, y la necesidad de elaborar nuevos productos documentales.

Puntos fuertes:

- Equipo joven, orientado al cambio y a los que les gusta la profesión.

- Medios técnicos avanzados para el desempeño del trabajo, como veremos más adelante en la sección de equipamiento.

Propuestas de mejora:

- Fijar una plantilla orgánica propia del órgano judicial que corresponda a los cometidos encomendados al mismo y refleje la actividad de la biblioteca.
- Desarrollo de la RPT del Servicio de Biblioteca y Documentación.⁹³
- Desarrollo de la formación profesional continua y diseño de planes de formación.
- Fijar una plantilla orgánica propia del órgano judicial que corresponda a los cometidos encomendados al mismo.
- Promoción profesional e incentivos para el personal. Hay que tener en cuenta, sobre todo, la promoción profesional de los funcionarios de justicia que han realizado un tipo de oposición que nada tiene que ver con las funciones que están desempeñando, pero que han adquirido los conocimientos teóricos y prácticos para desenvolverse dentro de la profesión bibliotecaria, cortándoseles las oportunidades de promoción dentro del Cuerpo al que han opositado.
- Creación de plazas de técnicos

- Instalaciones y equipamiento

La biblioteca se encuentra en el primer piso de un edificio que fué construido con anterioridad para otros fines y con el tiempo ha sufrido distintas remodelaciones.

Se organiza en las siguientes zonas: acogida o vestíbulo, sala de trabajo del servicio de documentación, sala de lectura con 20 puestos y un Opac para consulta de los usuarios, y sala de reuniones. La colección se alberga en las distintas zonas de la Biblioteca y en el depósito que se encuentra en la parte baja del edificio, en un local que comparte con el Archivo, y en la *antigua biblioteca*, contigua al Gabinete Técnico, donde se custodia el fondo antiguo.

⁹³ Esta posibilidad se contempla en la Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, con la implementación de la nueva oficina judicial.

En la sala de lectura, cuyas paredes se encuentran forradas con armarios y estanterías acristaladas para albergar los libros, los espacios son polivalentes. Es decir, en ellos se realiza el trabajo interno, se atiende al público, se estudia y en algunos casos sirven para la realización de actos culturales y oficiales de la Institución.

Cuenta con un tipo de mobiliario relativamente nuevo pero de diseño antiguo y poco funcional, resultando incómodo para usuarios y personal.

El equipamiento informático está formado por ordenadores personales, impresoras en red, lectores de CD-Rom.

El Centro también dispone de programas de bases de datos relacionales y documentales, un sistema integrado de bibliotecas (Absys), una Intranet (red local corporativa) y programa propio (Lotus Notes), donde se permite diferenciar ámbitos de servicio para grupos determinados de usuarios, en el ámbito de toda la Organización.

Se trabaja con un servidor de red interna que da servicios de archivos e impresión e interconecta los PC's; un servidor web y de correo electrónico; y un Router que conecta los PC's a la red informática del Ministerio de Justicia, la cual se encuentra integrada en la red denominada "Punto neutro judicial". Esta Red de Comunicaciones, cuyo nodo central está soportado por el propio Consejo General del Poder Judicial, facilita las comunicaciones entre las distintas Redes judiciales de las Comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia, permitiendo, entre otras facilidades, el acceso a las bibliotecas judiciales.

La rotulación y señalización no es muy pródiga, exceptuando los rótulos que figuran en la puerta del despacho de dirección.

El horario es de lunes a jueves de 9 a 14,30 y de 16 a 18,30, viernes de 9 a 14,30.

Puntos fuertes:

- Buena calidad de las instalaciones de biblioteca en cuanto a puestos de

lectura

- Contacto fácil entre usuarios y personal
- Espacios agradables y confortables

Puntos débiles:

- Poco flexible ya que no permite variaciones ni futuras expansiones.
- Falta de espacio material para desarrollar, de forma eficiente, su cometido
- Inseguro. No dispone de dispositivo de alarma que evite la pérdida de libros
- El depósito, con una superficie muy exigua para el volumen de fondos y demasiado alejado de la Biblioteca, con conexiones incómodas y poco operativas. Además, la escasez de espacio para albergar el creciente aumento del número de fondos, obligan a contratar los servicios de una empresa de custodia externa.
- .- Mala señalización de los espacios.
 - Mobiliario deficiente

Propuestas de mejora:

- Dotar al mobiliario de mayor funcionalidad y mejorar la señalización
- Reforzar la insonorización y climatización de las distintas zonas.
- Acondicionamiento de locales que posee la Institución para albergar en condiciones el depósito de libros.
- Mejorar la red de comunicaciones, aumentando el ancho de banda de la línea del Ministerio de Justicia.

Colección (fondos documentales)

La colección es junto con el personal, el aspecto fundamental de los servicios de la Biblioteca. La colección refleja la memoria de la Institución así como las necesidades e intereses de los usuarios.

Hay que apuntar que el desarrollo de la documentación jurídica en España durante los últimos veinte años es desbordante. Para Maciá y otros autores, este desarrollo es un síntoma de la anormalidad, hasta llegar a un punto donde

ni siguiera los mismos juristas son ya capaces de controlar y conocer lo pertinente y lo no pertinente para un determinado asunto.⁹⁴

Paéz cita a modo orientativo que en España se producen cada año aproximadamente unos 800.000 documentos jurídicos⁹⁵, entre los que se encuentran disposiciones generales y normas administrativa estatales y autonómicas, sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y otros tribunales inferiores. A estos documentos hay que añadir los elaborados por los órganos internacionales. Además se publican aproximadamente 5000 monografías y artículos de revista de contenido jurídico, a los que hay que añadir los recursos electrónicos. Hay que tener en cuenta que muchas editoriales simultanean las publicaciones de libros con las publicaciones periódicas y, últimamente, productos informáticos.

Con esta producción, no hay duda, como afirman Mateo Maciá et al., que el mundo del Derecho sigue siendo uno de los motores de la industria editorial española,⁹⁶ sobre todo desde la aparición de la figura del editor profesional y especializado, reforzada con la entrada en vigor de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual, que viene a sustituir a la antigua Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 por la cual la Administración se reservaba el derecho exclusivo de las publicaciones de las normas. La fundación de importantes editoriales españolas para hacer frente a la demanda bibliográfica esta siendo sustituida en la actualidad por grandes corporaciones transnacionales que dominan una edición cada vez mas globalizada.

La IFLA resalta la importancia de establecer una política de colecciones para mantener los costos bajos mediante la evaluación de las necesidades de la clientela de la biblioteca a la cual sirve, priorizando sus necesidades y

⁹⁴ Maciá, M., Gonzalo Rozas, M.A., Martínez-Cañavate, M. R. "documentación legislativa española". En: *Manual de documentación jurídica*. Madrid: Síntesis, 1998. p. 84

⁹⁵ Paéz Mañá, J. *Bases de datos jurídicas: características, contenido, desarrollo, marco legal*. Madrid: Cindoc, 1994 p.8

⁹⁶ Maciá. Op. Cit. p. 85

diseñando pautas generales y claras para los materiales que serán adquiridos.⁹⁷

Por lo que se refiere a la Biblioteca del alto tribunal, en la selección de los materiales se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios de pleno de derecho, la actualidad de la información, el prestigio de los autores, y el equilibrio entre las distintas ramas del derecho. Para ello, se utilizan distintos instrumentos o fuentes como los tradicionales catálogos y bibliografías impresas a los que hay que añadir su versión electrónica, incluidas los sitios web de proveedores, los Boletines de Novedades de otras bibliotecas jurídicas, las desideratas y peticiones de los lectores, especialmente de los usuarios de pleno de derecho y los libros y recursos electrónicos a examen.

Los sistemas de adquisición son fundamentalmente dos: la compra directa o por suscripción, y las donaciones realizadas por editoriales, organismos oficiales, particulares y miembros de la Institución. Entre las donaciones, cabe señalar la realizada por el Marqués de Olivart y que comprende valiosas obras pertenecientes al siglo XIX, que viene a engrosar el fondo antiguo de la colección. Mención especial merece el Acuerdo suscrito en el año 2005 con la Biblioteca Nacional, donde se cede a la Biblioteca el tercer ejemplar de las publicaciones de derecho que ingresen por depósito legal.⁹⁸

Las adquisiciones electrónicas, en particular las bases de datos en línea, se encuentran condicionadas por los nuevos modelos de comercialización cuyas tarifas varían según el número de usuarios totales o simultáneos, nivel de compra en la versión en papel, grandes paquetes de títulos, compras individuales o consorciadas,⁹⁹ siendo la práctica habitual en la Biblioteca el de la *licencia* que permite un uso ilimitado del tiempo y número de usuarios ligado a direcciones IP.

⁹⁷ IFLA: *Lineamientos para bibliotecas legislativas*. La Haya: IFLA, 1997

⁹⁸ La normativa sobre Depósito Legal se encuentra regulada por Decreto de 23 de diciembre de 1957, revisado en 1973. En la actualidad está pendiente de revisión con el fin de resolver el problema de recogida de nuevos materiales y adaptarse a la nueva situación política del Estado de las Autonomías.

⁹⁹ Santonja, L. *Situación actual de la edición científica*. 2006. Documento interno

Desde 1998 en que se destinó a la biblioteca un presupuesto inicial para la compra de unos 4.000 libros que pusieran al día la Biblioteca, hasta la actualidad, el aumento progresivo de las dotaciones económicas para la compra de fondos bibliográficos y documentales, realizadas por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial,¹⁰⁰ⁱ ha ido en *crescendo*, lo que demuestra una revaloración del servicio por parte de la Institución.

La Biblioteca ha reunido una colección que actualmente podemos resumir de la siguiente manera:

1. Recursos en papel:

- Monografías:

Fondo antiguo: Organizado y catalogado a finales de 1998 mediante un Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, dentro de las actuaciones del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Se vuelca en el Catálogo automatizado hacia mayo de 2001.

Comprende un total de 1176 obras, de las cuales 37 obras son del siglo XVI, 115 obras del siglo XVII, 686 obras del siglo XVIII, y 338 del siglo XIX, repartidas en tres colecciones: A, B, C. con el único criterio diferenciador del respeto a su antigua numeración topográfica, que aparecía repetida en muchos volúmenes.

Entre las obras antiguas del s. XVI predominan obras de tipo religioso, como dos obras de AZPILCUETA, Martín: *Theologi opera* (1589) y *Consiliorum Responsarum* (1591), ambas impresas en Lugduni (Italia); y recopilaciones de leyes como las *Recopilación de las Ordenanças de la Real Audiencia y Chancillería de su Majestad que se reside en la Villa de Valladolid* (1566), impresa en Valladolid, por Francisco Fernández de Cordoua, y la obra de derecho civil y foral de Cataluña de Socarrats, Joan de : *...de consuetudinibus Cathaloniae inter. Dominos.* (1551); .obras de tipo doctrinal, como 2 obras de Diego de Covarrubias y Leyva : *Sub Carolo V.* (1566) y *Sub Philippo secundo Hispaniarum Rege.* (1563), impresas en Salamanca. Asimismo, la Biblioteca

¹⁰⁰ En el año 2000 el CGPJ cambia los criterios para distribuir el importe asignado a cada biblioteca para su actualización, el cual se establece en proporcional al número de jueces y magistrados a los que da servicio la biblioteca en cuestión, y no siguiendo el criterio de un reparto estrictamente igualitario que se venía haciendo hasta ahora.

posee obras impresas en los famosos talleres venecianos de la época, como la de Menochio, Giacomo, *In omnes praecipuas Recuperandae Possessionis Constituiones Comentaría* (1572).

Fondo moderno:

Cuenta con cerca de 17500 títulos diferentes de libros, al que hay que añadir los libros que se reciben de la Biblioteca Nacional desde 2005, que suman en la actualidad unos 4000. Este fondo se encuentra muy actualizado, aunque se carece de datos que permitan medir la calidad, y adecuación de la colección por áreas temáticas.

- Colección de referencia o de consulta: Enciclopedias, diccionarios, manuales de documentación e informática, tesauros, textos legales
- Publicaciones periódicas: anuarios, directorios, memorias y discursos de apertura de tribunales, etc.

Revistas: cerca de 150 títulos de revistas vivas, de las que aproximadamente el 40% se obtienen mediante donaciones, y otras tantos de revistas muertas.

Repertorios jurídicos impresos de legislación y jurisprudencia, entre los que se encuentran: el primer repertorio oficial de legislación y jurisprudencia la *Colección legislativa de España*, que incluye las colecciones legislativas y de jurisprudencia, desde sus inicios, desde sus inicios en 1853 y 1857, respectivamente, y en la actualidad en vías de digitalización por el CENDOJ. El *Repertorio cronológico de legislación*, de la editorial Aranzadi, iniciado en 1930; el *Diccionario de legislación*, de Aranzadi (1ª ed. 1951), contiene la legislación vigente desde el año 1858 y la edición posterior el *Nuevo diccionario de legislación.*; el *Diccionario de la Administración Española Alcubilla*, que compila las disposiciones que se encontraban diseminadas en la época en forma de diccionario y las ordena alfabéticamente por voces.

2. Recursos electrónicos

- Bases de datos bibliográficas

-El Catálogo Colectivo de las bibliotecas judiciales es un catálogo con más de 80.800 registros bibliográficos y proporciona acceso a más de 307.600 de documentos físicos conservados en 204 bibliotecas. Es consultable por web

y mantiene enlaces con los catálogos locales. Esto permite al usuario, una vez localizado un documento en el catálogo colectivo, desplazarse virtualmente a una de las bibliotecas que dispone de un ejemplar y consultar tanto su localización como estado.¹⁰¹

- Bases de datos jurídicas, en línea y en disco óptico, que incluyen repertorios de legislación, jurisprudencia y doctrina, así como otros productos jurídicos digitalizados de publicaciones periódicas y monografías.

Portales

- Portal del Poder Judicial¹⁰²: alberga las páginas del Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Supremo y de todos los Juzgados y Tribunales de España. Además, proporciona enlace a recursos externos. La página del Tribunal Supremo, donde se encuentra la página web de la Biblioteca, ofrece la posibilidad de consultar su base de datos de jurisprudencia, donde se puede acceder a los autos y sentencias a texto completo, el catálogo de la Red de bibliotecas judiciales, publicaciones del Tribunal Supremo y otros documentos de interés.

3.- Productos propios de la Biblioteca:

- Catálogos automatizados de diversas obras de referencia: diccionarios, textos legales, libros Biblioteca Nacional que todavía no se han volcado en el Catálogo colectivo.
- Cuadernos de documentación, donde se recoge normativa comunitaria, índices de revistas, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales europeos, Consejo de Europa, normativa nacional, nuevas adquisiciones de libros, curiosidades y anécdotas.
- Dossier de información jurídica

Puntos fuertes:

¹⁰¹ Datos extraídos de la página web del Consejo General de Poder Judicial. [consultada el 1 de junio de 2006]

¹⁰² <http://www.poderjudicial.es/>

- Gestión automatizada del proceso técnico de catalogación de libros y revistas
- Publicación mensual de novedades bibliográficas que se distribuye a gran parte de los usuarios de pleno derecho, así como la elaboración de otros productos documentales

Puntos débiles:

- Infrautilización del programa de gestión automatiza que impide la recolección de datos fiables que refleje la evolución de la colección, el nivel de uso de la biblioteca, las pérdidas, etc. y poder llevar a cabo una evaluación del rendimiento de la colección y del servicio.
- Carencia de una reglamentación que normalice las políticas de donaciones y expurgo. Así como la inexistencia de políticas de preservación y conservación tanto de los materiales digitales como de los fondos impresos.
- Carencia de un sistema uniforme de recogida de datos para evaluar la colección en sí misma y garantizar la compatibilidad con las bibliotecas jurídicas de su entorno.

Propuestas de mejora:

- Elaborar estadísticas que refleje la marcha de la biblioteca y su gestión
- Desarrollar programas de gestión de la colección en los ámbitos de expurgo y donaciones.
- Realizar evaluaciones de la utilización y rendimiento de las bases de datos electrónicas.
- Aunar esfuerzos para la redacción y divulgación de un reglamento común a todas las bibliotecas jurídicas que integren la red y reforzar la cooperación entre las mismas.

7. Conclusión

La Biblioteca del Tribunal Supremo es resultado de un largo proceso evolutivo, condicionado por factores políticos, sociales y profesionales. Su desarrollo ha sido lento y arrastra déficits históricos como la falta de personal adecuado para el desarrollo de sus funciones. El capital humano sigue relegado a un segundo plano por debajo de la colección, que crece a un ritmo desbordante.

Con la llegada masiva de libros por compra y donación, ésta Biblioteca va camino de convertirse en una de las mayores bibliotecas en fondos de derecho, sin embargo antes de que ocurra eso, deberá resolver su asignatura pendiente: el personal, elemento clave para su modernización.

El momento presente es complejo y sus opciones de futuro van a estar determinadas por los nuevos desarrollos tecnológicos. Se han ampliado las colecciones y los soportes de recursos electrónicos, las técnicas bibliotecarias se van unificando con el resto de las bibliotecas judiciales de la Red y hay una mayor concienciación de la importancia de este servicio en la Institución. No obstante, para cambiar su imagen tradicional de biblioteca-depósito por la de biblioteca-lugar especializado de acceso a todo tipo de recursos, se alberguen en ella o no; imagen más propia del siglo XXI, deberá combinar los recursos informativos tradicionales impresos con los nuevos recursos tecnológicos, seleccionando hábilmente las opciones que mejor se adecuen a sus usuarios. Para ello necesitará contar con personas motivadas, orquestadas, lideradas y comprometidas con el proyecto y que contribuyan a mejorar la eficacia, la eficiencia y la competitividad de todos sus servicios.

8. Bibliografía

A.A.V.V. *Jornadas sobre el Poder Judicial en el Bicentenario de la Revolución Francesa*. Madrid: Ministerio de Justicia, 1990.

A.A.V.V. *Lenguaje judicial*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1998.

A.A.V.V., *Constitución y Poder Judicial: XXV Aniversario de la Constitución de 1978*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2003

A.A.V.V., *Justicia en Guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española. Instituciones y fuentes documentales*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990.

A.A.V.V., *La Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*. Navarra: Thomson-Aranzadi, 2005

A.A.V.V., *Los sistemas de información al servicio de la sociedad: actas de las VI Jornadas Españolas de Documentación*. Valencia, del 29 al 31 de octubre de 1998. Valencia: FESABID, 1998

A.A.V.V.?, *Tribunal Supremo de Justicia*. Madrid: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, 2004.

ALBERCH i FUGUERES, R., *El concepto, la historia y el marco legal de los archivos*. Barcelona: UOC, 2003. (Documento de trabajo)

ALVARO BERMEJO, C., SANZ DE ORMAZABAL, I., CUETO APARICIO, M., “El Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial” en *Los sistemas de información al servicio de la sociedad: actas de las VI Jornadas Españolas de Documentación*. Valencia, del 29 al 31 de octubre de 1998. Valencia: FESABID, 1998

ALVITE, M.L., “Evolución de las bases de datos jurídicas en España” en *Anales de Documentación*, 2004, nº 7.

ALZAGA VILLAMIL, O., “El Poder judicial en las Constituciones españolas” en *Constitución y Poder Judicial: XXV Aniversario de la Constitución de 1978*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2003

Anales de Documentación. Murcia: Universidad de Murcia, 2004, nº 7

Boletín de Información del Ministerio de Justicia., Madrid: Ministerio de Justicia, 1970

DE LA BÁRCENA, A.M.,? *El Palacio de Justicia en Madrid: descripción del edificio, antecedentes históricos, las casas de Justicia de antaño*. Madrid: Est. Tip. de Blass, 1927.

GANDAREGUI, M.J. "Historia del lenguaje judicial" en *Lenguaje judicial*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1998.

GARCIA EJARQUE, L., *Historia de la lectura pública en España*. Gijón: Trea, 2000.

GARCIA PAREDES, CH., BARABINO BALLESTEROS, J.M., "Orígenes y formación de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" en *La Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*: Navarra: Thomson-Aranzadi, 2005.

GARCÍA-GOYENA, F., *Tribunal Supremo de España: noticias sobre su historia, organización y funcionamiento*. Madrid: Reus, 1929

IFLA., *Lineamientos para bibliotecas legislativas: versión actualizada del Guidelines for legislative libraries editada por Dermont Englefield*. La Haya: IFLA, 1997

ITURMENDI BAÑALES, A., *Perfeccionamiento de la organización y procedimiento de la justicia. Discurso leído por el Excmo. Sr.D.... Ministro de Justicia en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada el 15 de septiembre de 1964*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia, 1964

JORNADAS DE BIBLIOTECAS JUDICIALES (3ª, octubre 2003). (Documento de trabajo)

LANERO TÁBOAS, M., *Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945)*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996.

LASSO GAITE, J.F., *Aportación a la historia del Tribunal Supremo*. Madrid: Reus, 1968.

- *Crónica de la codificación española: organización judicial*. Madrid: Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, 1999

LORCA NAVARRETE, A.M., *Organización judicial española en el vigésimo aniversario de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985-2005)*. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2005.

MORENO PASTOR, L., *Los orígenes del Tribunal Supremo, 1812-1838*. Madrid: Ministerio de Justicia, 1989.

PAÉZ MAÑÁ, J., *Bases de datos jurídicas: características, contenido, desarrollo, marco legal*. Madrid: Cindoc, 1994

Revista del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, 2004, nº 4.

^{nota} RODRÍGUEZ MAGALLANES, E., “Documentación del Archivo del Tribunal Supremo” en *Justicia en Guerra: Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes documentales*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990.

SÁNCHEZ TORRE, F., *Lo gubernativo en los tribunales y juzgados*. Albacete: Imprenta y Librería de Sebastián Ruíz, 1899

SANZ de ORMAZABAL, I., LASA JÁUREGUI, J., “Red de bibliotecas judiciales: situación y estudio de conectividad” en *Revista del Poder Judicial*, 1999, nº 56
TOMÁS y VALIENTE, F. “De la Administración de Justicia” en *Jornadas sobre el Poder Judicial en el Bicentenario de la Revolución Francesa*. Madrid: Ministerio de Justicia, 1990.

TRANZADO RUIZ, M., “En torno al Secretariado y su selección”. en *Boletín de Información*, 1970.

URBANO CASTRILLO, E., “Los gabinetes técnicos de los grandes tribunales” en *Revista del Centro de Estudios Jurídicos*, 2004, nº 4.

Ana Pérez-Olleros
Teléfono: 91-4485349
C/ Feijóo, 6 6B
28010 Madrid
<mailto:a.polleros@ts.mju.es>
Finalizado en Julio de 2006